

Santiago, veintiséis de abril de dos mil veintiuno.

Al escrito folio N° 129528-2020: téngase presente la comparecencia y no ha lugar a los alegatos solicitados.

**Vistos:**

En estos autos Rol Corte Suprema N° 79.288-2020, sobre procedimiento de reclamación de multa previsto en el artículo 30 del Decreto Ley N° 3.538 que Crea la Superintendencia de Valores y Seguros, en adelante SVS, caratulados "PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores y Compañía Limitada (PwC) y otro con Superintendencia de Valores y Seguros", la reclamante dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de fecha 01 de junio de 2020 dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que, en lo que interesa al recurso, confirmó la de primera instancia que rechazó la reclamación deducida en contra de la Resolución Exenta N° 223 de 20 de julio de 2015, emitida por la Superintendencia reclamada, que impone a la empresa consultora una multa de 2.000 U. F. y a don Javier Gatica Menke, en calidad de socio a cargo de la auditoría objeto de la sanción, una multa de 1.500 U.F., por las infracciones en que incurrieron con motivo de la revisión incompleta al emitir informe de los estados financieros de Sociedad Pampa Calichera S.A., Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. y sociedad Norte Grande S.A., al mes de junio de 2011; y en la emisión de la opinión de auditoría sobre



estados financieros de las sociedades Potasios de Chile S.A., Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande, al 31 de diciembre del mismo año.

Encontrándose la causa en estado, se trajeron los autos para dar cuenta, de conformidad a lo previsto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil.

**Considerando:**

**Primero:** Que constituyen antecedentes de la presente causa los siguientes:

**I.-** La autoridad fiscalizadora expresó, en un contexto general:

**1.-** El Mercado de Valores constituye el sistema en el que se transan instrumentos mercantiles que representan valores mediante oferta pública, constituido por personas e instituciones que emiten o intermedian en su transferencia, canalizando inversiones y la obtención de recursos financieros.

**2.-** La emisión de valores de oferta pública por las sociedades anónimas, como manera de obtener recursos de los inversionistas y financiar sus proyectos, obliga a dichas entidades a proveer a los accionistas y al mercado en general de la información fidedigna que sea necesaria para compra y venta de los instrumentos - en forma continua y mediante subastas - permitiendo a los inversionistas y a los distintos agentes, conocer la real situación financiero-económica de la compañía,



encontrándose prohibidas legalmente las acciones que tiendan a interferir indebidamente en dicho mercado.

**3.-** Indicó que el marco legal regula la actuación de los auditores externos, a los que les corresponde examinar los estados financieros y registros contables de las sociedades, aplicando los procedimientos de auditoria, de forma de opinar profesional e independientemente acerca de la razonabilidad de todos los aspectos significativos de la situación financiera y económica de la entidad auditada, debiendo para ello, actuar con la máxima diligencia y respondiendo de la culpa leve, debiendo revelar si la información significativa de la compañía es adecuada, la cual valida, constituyéndose en un apoyo a su fiscalización.

El artículo 239 de la Ley N° 18.045 dispone que la función de las empresas de auditoría externa constituyen sociedades que, dirigidas por sus socios, prestan diferentes servicios a los emisores de valores y demás personas sujetas a la fiscalización de la Superintendencia; funciones que complementa el artículo 246.

Anualmente, las juntas ordinarias de accionistas de las sociedades anónimas abiertas deben designar una empresa de auditoría externa -regida por el Título XXVIII de la Ley N° 18.045- con el objeto de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados



financieros de la sociedad, y con la obligación de informar por escrito a la próxima junta ordinaria de accionistas, sobre el cumplimiento de tal mandato. Dicho informe se incorpora en la Memoria Anual de la compañía junto con los estados financieros.

Los auditores externos regidos por tal norma sólo podrán prestar servicios de auditoría previa inscripción en el Registro de Empresas de Auditoria Externa que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, la que los inscribe una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos legales y acompañando copia de su Reglamento Interno con las materias que indica la norma. Los requisitos de inscripción y las inhabilidades de los socios de las empresas de auditoria externa se encuentran en los artículos 239 y siguientes de la Ley N° 18.045, disposiciones orientadas a velar por su independencia de juicio de la entidad auditada. Para dicho fin, además, entre las denominadas condiciones de confiabilidad de que deben gozar las firmas de auditoría externa, se refieren la idoneidad moral y técnica, que se traduce en contar con personal honorable, altamente calificado con conocimientos y experiencia; y la independencia y objetividad, tendientes a evitar o minimizar conflictos por dependencia económica, por tener relaciones con el emisor (de propiedad o laborales) o por prestación de otros servicios. Tales condiciones se abordan en la ley



chilena a través de las disposiciones contenidas en el Título XVIII de la Ley de Mercado de Valores y en el Reglamento de Sociedades Anónimas. En ese contexto, cabe destacar las causales de cancelación o suspensión de la inscripción del Registro de Empresas de Auditoría del artículo 240 de la Ley N° 18.045, las inhabilidades para ser socio de empresas de auditoría del artículo 241 de la misma ley, la limitación a la prestación de servicios de auditoría del artículo 242 de la citada ley, las presunciones de falta de independencia de juicio de la sociedad auditada del artículo 243 y 244, y la diversificación de ingresos respecto de los clientes de la letra f) del artículo 246.

4.- Por otra parte, se ha expresado, sin controversia, que conforme a la Memoria Anual correspondiente al año 2010 de Norte Grande S.A., de Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A, de Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A., y de SQM, al 31 de diciembre de 2010, las sociedades emisoras de valores de oferta pública que conformaban el grupo denominado Cascada eran: Norte Grande, con una participación accionaria de 75,56% en Oro Blanco; Oro Blanco, con una participación accionaria de 97,34% en Pampa Calichera; y esta última, junto con su filial Global Mining (Chile) Limitada, con una participación accionaria de 30,7% en



Soquimich. Asimismo, Norte Grande poseía una participación de aproximadamente 0,48% de SQM.

El año 2011, fruto de la división de Oro Blanco, surgió Nitratos de Chile S.A., y su controlador, con un 75,72% de su capital (según la Memoria de Oro Blanco de 2011) era Norte Grande. Durante el año 2011 Pampa Calichera S.A. se dividió en dos sociedades anónimas abiertas, subsistiendo ésta como continuadora legal y creándose Potasios de Chile S.A. Así, y según da cuenta la Memoria Anual de Potasios de 2011, el controlador de Potasios es Nitratos con un 88,83% de su propiedad y, como se mencionó precedentemente Norte Grande es el controlador de esta última con un 75,72%.

**5.- Son hechos no controvertidos:**

**a.-** El día 23 de diciembre de 2010 Pampa Calichera enajenó, en la Bolsa Electrónica de Chile, un total de 2.500.000 de acciones SQM-A, las que fueron adquiridas por Oro Blanco.

**b.-** El día 24 de diciembre de 2010, Pampa Calichera adquirió, en la BEC, un total de 2.503.721 acciones SQM-A a un precio promedio ponderado por acción de \$27.800, siendo las contrapartes de estas operaciones, Oro Blanco que vendió 2.500.000 de acciones a un precio promedio ponderado de \$27.800 y un tercero que vendió 3.721 acciones a un precio promedio ponderado de \$27.500.



**c.-** Los estados financieros del año 2010 fueron examinados por la auditora externa Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Limitada, la que fue sustituida por PWC a contar del año 2011.

**d.-** El día viernes 14 de enero de 2011, Pampa Calichera enajenó, en la BEC, un total de 2.500.000 de acciones SQM-A, las que fueron adquiridas por Oro Blanco.

**e.-** El día hábil siguiente, esto es, el lunes 17 de enero de 2011, Pampa Calichera adquirió, en la BEC, a Oro Blanco un total de 2.500.000 de acciones SQM-A a un precio promedio ponderado de \$27.850.

**f.-** En la sesión de directorio Pampa Calichera de fecha 19 de enero de 2011, el gerente general informó al directorio de las siguientes compras y ventas de acciones efectuadas con el título SQM-A: (i) día 23 de diciembre de 2010, venta de 2.500.000 de acciones SQM-A por \$67.351 millones a un precio promedio por acción de \$26.946,94; (ii) día 24 de diciembre de 2010, compra de 2.503.721 acciones SQM-A por \$ 69.619 millones a un precio promedio por acción de \$27.799,55; (iii) día 14 de enero de 2011, venta de 2.500.000 de acciones SQM-A por \$ 69.500 millones a un precio promedio por acción de \$27.800; y (iv) día 17 de enero de 2011, compra de 2.500.000 de acciones SQM- A por \$69.625 millones a un



precio promedio por acción de \$27.850. En el acta de dicha sesión se puede leer:

"Al respecto el señor Gerente General señala que la Compañía vendió en el mercado abierto a través de la Bolsa de Comercio 2.500.000 acciones SQM-A las cuales fueron compradas por Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. Luego, con fecha 24 de diciembre de 2010 también en mercado abierto, la Compañía compró 2.503.721 acciones serie A con el fin de mantener la posición de controladora de SQM".

En el acta de dicha sesión no existe detalle, relativo a si el gerente general informó la contraparte de las operaciones realizadas en enero de 2011 y cuál era la finalidad de esas operaciones.

**g.-** En la sesión de directorio de Oro Blanco de fecha 19 de enero de 2011, el gerente general informó al directorio de las siguientes compras y ventas de acciones efectuadas con el título SQM-A: (i) día 23 de diciembre de 2010 compra de 2.500.000 de acciones SQM-A por \$67.383 millones a un precio promedio por acción de \$26.946,94; (ii) día 24 de diciembre de 2010, venta de 2.500.000 acciones SQM-A por \$69.483 millones a un precio promedio por acción de \$27.800; iii) día 14 de enero de 2011, compra de 2.500.000 de acciones SQM-A por \$69.500 millones a un precio promedio por acción de \$27.800; y (iv) día 17 de enero de 2011, venta de 2.500.000 de





acciones SQM-A por \$69.625 millones a un precio promedio por acción de \$27.850. En el acta de dicha sesión no hay detalle si el gerente general informó la contraparte de las operaciones realizadas en diciembre de 2010 y enero de 2011 y cuál era la finalidad de esas operaciones.

**h.-** En sesión de directorio de fecha 3 de marzo de 2011, el gerente general, Sr. Aldo Motta, informó al directorio de Pampa Calichera que habían surgido ciertas discrepancias con Ernst & Young, auditores externos de la compañía, referente al reconocimiento de las utilidades producidas por la venta de acciones SQM-A de diciembre de 2010. En el acta de dicha sesión se puede leer: "El señor Gerente General, informa al Directorio que en esta sesión correspondería revisar los Estados Financieros de la Compañía, lo cual no será posible en virtud de existir una discrepancia con los auditores externos Ernst & Young, con respecto a la utilidad generada en operaciones de compra y venta de acciones SQM.(...) Al respecto, los auditores externos son de la opinión que la utilidad generada como consecuencia de las ventas de acciones SQM, no es una utilidad realizada y no quedaría demostrada y por tanto el resultado sería nulo, en virtud de que son operaciones entre entidades de un grupo controlador. Asimismo, los auditores señalan que si se podría aceptar la utilidad en la medida que las operaciones hubieren sido realizadas con un tercero."



De acuerdo al acta de dicha sesión, el Sr. Aldo Motta dio a conocer que la administración era de la opinión que dicha utilidad sí estaba realizada; al respecto, en el acta de la sesión de fecha 3 de marzo se indica: "La administración de la Compañía estima no aplicable el criterio de los auditores externos en el sentido que la utilidad sí está realizada, que es absolutamente válida y correcta y que la utilidad que se genera en Pampa Calichera y se elimina a nivel de consolidado con Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. (...) Asimismo agrega el señor Gerente General con respecto a las operaciones de compra y venta de las acciones en cuestión, en el sentido de que estas operaciones fueron informadas al mercado, a precio de mercado, en días distintos e inclusive se generó competencia en el sentido que siempre hubo más interesados en los paquetes accionarios."

**6.-** Los hechos específicos materia de este procedimiento son los siguientes:

**a.-** El 29 de marzo de 2011 la sociedad Global Mining Chile Limitada, filial de la sociedad Pampa Calichera, vendió entre las 9:33 horas y las 11:40 horas, 5.000.000 de acciones SQM-A a la sociedad Linzor Total Return Fund, a \$ 27.100 cada una.

**b.-** El mismo día 29 de marzo de 2011, la sociedad Linzor vendió a la sociedad Oro Blanco, entre las 9:36



horas y las 11:43 horas, 5.000.000 de acciones SQM-A a un precio de \$27.138,5 cada una.

**c.-** Las operaciones de venta se efectuaron por medio de Banchile Corredores de Bolsa S. A. en la Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.

**d.-** Los fondos obtenidos por la sociedad Global Mining por la primera transacción fueron prestados a sociedad Pampa Calichera. Por su parte, Pampa Calichera, a su vez, prestó tales fondos a la sociedad Oro Blanco, a través de las respectivas cuentas relacionadas, para que esta última realizara la operación de compra. En Acta de Sesión Extraordinaria de Directorio de Pampa Calichera de 28 de marzo de 2011, se aprobó por unanimidad otorgar a Oro Blanco un crédito por hasta US\$ 300 millones, con una tasa de interés anual del 5%. A dicha sesión asistieron los directores Julio Ponce Lerou, Luis Eugenio Ponce Lerou, Patricio Phillips Sáenz, Francisca Ponce Pinochet, Julio Ponce Pinochet y Pablo Guerrero Valenzuela.

En Acta de Sesión Extraordinaria de Directorio de Oro Blanco de fecha 28 de marzo de 2011, se informa el otorgamiento del crédito de hasta US\$ 300 millones parte de Pampa Calichera a Oro Blanco, con una tasa de interés anual del 5%. Se informó que el destino de estos fondos sería la adquisición de acciones de SQM-A en el mercado. A dicha sesión asistieron Julio Ponce Lerou, Luis Eugenio Ponce Larou, Francisca Ponce Pinochet, Julio Ponce



Pinochet, Roberto Izquierdo Menéndez (director independiente y miembro del Comité de Directores) y Pablo Guerrero Valenzuela (director común con Pampa Calichera y miembro del Comité de Directores), quienes aprobaron por unanimidad dicho crédito.

**e.-** En sesión de 29 de marzo de 2011, don Aldo Motta, gerente general de Pampa Calichera y de Oro Blanco, informó al directorio de las sociedades el otorgamiento y aceptación, respectivamente, de un crédito por US\$ 300 millones y su utilización. Las transacciones expresadas fueron registradas y constan en las respectivas Actas de Directorios celebradas al efecto.

**f.-** El 17 de agosto de 2011, en junta extraordinaria de accionistas de Pampa Calichera se acordó la división de dicha sociedad, dando origen a Potasios, asignándole, entre otros activos: a) el crédito correspondiente al préstamo que Pampa Calichera otorgó a Oro Blanco, el que fue utilizado en la adquisición de acciones SQM-A en marzo de 2011, y b) un patrimonio ascendente a MUS\$ 422.339 correspondiente a MUS\$ 146.524 de Capital Pagado y MUS\$ 275.815 de Utilidades Acumuladas registradas en los estados financieros de Pampa Calichera al 31 de marzo de 2011; de ésta última asignación, la proporción correspondiente a los Resultados del Ejercicio solo fue rebajada de las cuentas patrimoniales del Balance de Pampa Calichera y no así del Estado de Resultados del



ejercicio de esta última, la que mantuvo el registro de los MUS\$ 275.815.

**g.-** El 20 de octubre de 2011 la sociedad Potasios compró 5.000.000 de acciones SQM-A a Oro Blanco, la cual las pagó principalmente mediante la compensación del crédito que tenía con Oro Blanco, que le había sido asignado en la división de Pampa Calichera, saldando así Oro Blanco la deuda que inicialmente tuvo con Pampa Calichera y, luego de la división de ésta última con Potasios. Esta compra se realizó por Larraín Vial S. A. Corredores de Bolsa.

**h.-** PwC, como auditora externa, y el señor Gatica, como socio a cargo de la auditoría, suscribieron el informe interino y de auditoría sin salvedades, respecto de los estados financieros al 30 de junio y 31 de diciembre de 2011, de las sociedades Pampa Calichera, Oro Blanco, Norte Grande y Potasios, en los que se registraron las operaciones de marzo de 2011, asignándole el tratamiento contable de una operación realizada con terceros no relacionados. En tanto que, respecto de las operaciones de octubre de 2011, descrita en el numeral que antecede, la auditora validó el movimiento patrimonial de Potasios al 31 de diciembre de ese año, lo que consistió en el reproceso aritmético y lecturas de Actas de Sesión de Directorio.



**i.-** Mediante Acuerdo de Iniciación de 26 de marzo de 2012, la SVS inició un proceso de requerimiento de información a PwC, disponiendo diferentes instrucciones, las que fueron comunicadas a las Sociedades Cascada en abril del año 2012, generando la fiscalización del informe interino y de auditoría evacuados sin salvedades, documentos que fueron emitidos por la sociedad Auditora - bajo la responsabilidad del socio Gatica-, respecto de los estados financieros al 30 de junio y 31 de diciembre de 2011, de Pampa Calichera, Oro Blanco, Norte Grande y Potasios.

**j.-** En tal labor, la SVS habría pesquisado una serie de falencias en el trabajo e informe de auditoría antes referido, las que estimó eventualmente sancionables por vislumbrarse contravenciones a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), resolviendo formular cargos mediante el Oficio Reservado N° 1534 de 16 de diciembre de 2014, dando inicio al correspondiente proceso administrativo sancionatorio.

**k.-** Sin perjuicio de lo anterior y tras los descargos formulados por los reclamantes, estimando que en aquel oficio se había incurrido en una referencia no precisa al hacer alusión al "principio de la esencia sobre la forma", la SVS resolvió dictar el Oficio Reservado N° 69 de 23 de enero de 2015, a través del cual se reformulan los cargos en orden a reemplazar aquella



referencia por el principio de "Representación Fiel" del "Marco Conceptual para la Información Financiera", manteniendo la formulación de cargos primigenia en todo lo demás y otorgando un nuevo término a los reclamantes de hacer descargos, ampliar, modificar y complementar los ya realizados, lo cual fue efectuado por los actores.

**l.-** Los requeridos respondieron los cargos y rindieron prueba.

**m.-** La Resolución Exenta N° 223 de 20 de julio de 2015, emitida por la SVS, sancionó con multa a PwC y al socio Javier Gatica Menke por no haber actuado con razonable cuidado y diligencia en el análisis de las características e implicancias de las transacciones efectuadas los días 29 de marzo y 20 de octubre de 2011, al no observar ningún cuestionamiento en cuanto al fondo de estas operaciones, lo cual no habría permitido obtener satisfacción de auditoría suficiente que confirmase que la información financiera estuviera adecuadamente revelada. En virtud de lo anterior, en la resolución la SVS estimó que PwC y su socio Javier Gatica incurrieron las siguientes infracciones:

**i)** Las diversas NAGAS imputadas en los cargos, en relación a los deberes de cuidado establecidos en los numerales 1) y 3) del artículo 55 y 1) y 2) del artículo 56 del Reglamento de Sociedades Anónimas vigente a la época de los hechos en la revisión de los estados



financieros consolidados de Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A., Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. y Norte Grande S.A. a junio de 2011, y

**ii)** Las NAGAS imputadas en los cargos en relación los artículos 239, 246 y 248 de la ley N°18.045 en la emisión de los informes de auditoría a diciembre de 2011 de las citadas sociedades y de Potasios de Chile S.A.

**n.-** En contra de la Resolución Exenta N° 223 antes reseñada, los actores dedujeron el reclamo de ilegalidad substanciado en estos autos, en el que denunciaron, desde el punto de vista formal, la extemporaneidad o decaimiento de la actuación administrativa y sanción impuesta por la SVS y, en cuanto al fondo, alegaron: a) Infracción al principio de legalidad en razón de haber dictado el acto no autorizado de reformulación de cargos, b) Al haber rechazado indebidamente un punto de prueba y medios de prueba individualizados por los sancionados durante el procedimiento administrativos, c) haberse infringido la teoría de los actos propios que rige la confianza legítima en la Administración de los órganos del Estado y prescindir de los patrones de conducta que le permitió presumir y concluir la existencia de operaciones ficticias o simuladas, d) falta de fundamentación y, e) sesgo retrospectivo.





**o.-** Todos estos cuestionamientos a la legalidad de la Resolución Reclamada fueron rechazados en la sentencia recurrida.

**p.-** Las reclamantes dedujeron recurso de casación en el fondo respecto de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó el pronunciamiento de primer grado.

**7.-** Igualmente son hechos no controvertidos:

**a.-** Entre los días 31 de agosto y 1 de septiembre de 2011, PWC emitió los informes de revisión de Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande correspondientes a los periodos terminados al 30 de junio de 2011, en los cuales la Auditora afirma que "no se tiene conocimiento de modificaciones significativas que deban efectuarse a los estados financieros consolidados intermedios de dichas compañías".

**b.-** El 8 de marzo de 2012, se emiten los informes de auditoría de Potasios, Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande, en los cuales PWC afirma que los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de las sociedades al 31 de diciembre de 2011, los resultados integrales de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha.

**c.-** El 23 de marzo de 2012, la Superintendencia requirió a PWC mediante Oficio Ordinario N° 7752,



informar sobre el análisis efectuado en relación a la razonabilidad del reconocimiento de los efectos de las transacciones efectuadas el 29 de marzo de 2011.

**d.-** PWC, en su respuesta de fecha 27 de marzo de 2012 al Oficio Ordinario N° 7752, señaló: "concluimos que el tratamiento contable dado a esta operación está de acuerdo con IFRS, en consideración a que dicho diferencial se originó en una venta al mercado que generó un incremento en los beneficios económicos durante el ejercicio bajo examen, que resulta en un incremento patrimonial, el cual no corresponde a un aporte patrimonial ni a transacciones patrimoniales, ya que al no existir control directo ni indirecto sobre Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM), no se puede considerar esta venta como una transacción efectuada entre intereses controladores y no controladores.".

**e.-** La Superintendencia, con fecha 20 de abril de 2012, mediante Oficios Ordinarios N°s 10198, 10200, 10201 y 10207, instruyó, respectivamente, a Pampa Calichera, Norte Grande, Oro Blanco y Potasios, efectuar ajustes a los estados financieros, trimestrales y anuales, del año 2011, con el objeto de reversar el efecto contable de las transacciones efectuadas el día 29 de marzo de 2011, a las que se les dio un tratamiento que implicó una revalorización de parte de sus inversiones accionarias en SQM-A. En los oficios en cuestión se puede leer el



siguiente párrafo que, en lo medular, es común a los oficios dirigidos a Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande: "De lo anterior, se deduce que las citadas operaciones de venta y compra correspondieron, en la práctica, a transacciones entre entidades relacionadas y, que por aplicación de la 'esencia sobre la forma' necesaria para que la información financiera cumpla con la característica cualitativa de ser fiable, según el Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera(IFRS), ellas no conllevaron la enajenación de dichas acciones fuera del grupo relacionado a Pampa Calichera, porque las mismas -desde el primer día de la venta inicial 29 de marzo de 2011 por Global Minning- han seguido en poder del grupo...".

En los oficios antes referidos se instruyó para que los mismos sean puestos a disposición de PWC, de forma que ésta tomara conocimiento de dichas instrucciones y reemitiera los respectivos informes de revisión limitada y de auditoría según corresponda.

**f.-** Mediante Oficios Ordinarios N°s 10864, 10877, 10878, 10893, 13024, 13025, 13026 y 13027, la Superintendencia requirió a las Sociedades Cascada una mayor revelación de todas las operaciones con empresas relacionadas y solicitó que los estados de flujos de efectivo incorporasen transacciones omitidas.



g.- Con fecha 4 de junio de 2012, dando cumplimiento a lo instruido mediante Oficios Ordinarios N°s 10198, 10200, 10201 y 10207, PWC remitió sus informes de auditoría para las sociedades Pampa Calichera, Oro Blanco, Norte Grande y Potasios.

En el informe de auditoría de Pampa Calichera, suscrito por el Sr. Gatica, se puede leer lo siguiente:

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago, 8 de marzo 2012 (4 de junio 2012 para lo expresado en Notas 9.3 y 29)

1.- Hemos efectuado una auditoría a los estados consolidados de situación financiera de Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2011 y a los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) (...)

3.- En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la situación financiera consolidada de Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2011, los resultados integrales de sus operaciones y los flujos de



efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

4.- Como se indica en Notas 9.3 y 29, los estados financieros originalmente emitidos con fecha 8 de marzo de 2012 han sido complementados y modificados, a objeto de dar cumplimiento a lo solicitado por la Superintendencia de Valores y Seguros."

**h.-** Los Informes de los Auditores Externos reemitidos, suscritos también por el Sr. Gatica, para los estados financieros de Norte Grande, Oro Blanco y Potasios son similares al de Pampa Calichera.

En la nota 9.3 de los Estados Financieros, a la que hace referencia el Informe suscrito por el Sr. Gatica, se puede leer lo siguiente:

"Por instrucciones contenidas en el oficio ordinario N° 10.198 de fecha 20 de abril de 2012, complementadas por el oficio ordinario N° 13.027 de fecha 28 de mayo de 2012, la SVS ordenó revertir los efectos en el resultado de la Sociedad y en el activo afectado debiendo llevarlo a su valor original. Así, el monto de MUS\$ 234.985 fue rebajado de la cuenta Documentos y Cuentas por Cobrar a Empresas Relacionadas -a través de una cuenta complementaria- con cargo a Resultados Acumulados, efectuándose el mismo ajuste en Potasios de Chile S.A. Por su parte, el valor de las 5.000.000 de acciones de la Serie A de SQM S.A., quedaron registradas en el valor



original que tenían estas acciones en Inversiones Global (Mining) Chile Limitada a la fecha de la operación referida en el primer párrafo de la presente Nota. Además, en los citados oficios la SVS ordenó informar en la presente Nota que, para dicho Organismo, las operaciones descritas en los párrafos primero a tercero de esta Nota, en aplicación de la 'esencia sobre la forma' según el Marco Conceptual de las Normas Internacionales de información Financiera (IFRS), constituyeron en la práctica operaciones entre entidades relacionadas".

Una nota similar es contenida en los estados financieros reemitidos de Norte Grande, Oro Blanco y Potasios.

**i.-** Solicitados por el Organismo a PWC los papeles de trabajo que sustentan los informes de auditoría emitidos respecto de los estados financieros del Grupo Cascada, para el período correspondiente al 30 de junio -revisión limitada- y 31 de diciembre de 2011-opinión de la razonabilidad de los estados financieros-, se pudo determinar lo siguiente:

a) Operaciones entre partes relacionadas:

a.1 Revisión analítica.

a.1.i) En la cuenta de activo "Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes" de Pampa Calichera al 30 de junio de 2011, el saldo presentado de MUS\$284.613



fue considerado por los auditores externos como una variación inusual, y la explicación a dicha variación fue la siguiente: "La variación está dada por un presta (sic) a la empresa relacionada Soc. de Inv. Oro Blanco por un total de MUS\$284.613, este préstamo fue entregado con la finalidad de que Oro Blanco cancelara pasivos, este préstamo fue entregado mediante pagaré a la vista, en este pagaré se indica el tiempo de duración y la tasa de interés a cobrar."

a.l.ii) En la cuenta de resultados "Ingresos financieros" de Pampa Calichera al 30 de junio de 2011, el saldo presentando de MUS\$239.492 también fue considerado por los auditores externos como una variación inusual, y la explicación a dicha variación fue la siguiente: "La variación positiva de esta cuenta corresponden (sic) principalmente a los interés (sic) de fondos mutuos obtenidos durante el período transcurrido y por las ventas de 5.000.000 de acciones de serie A de SQM el 31-03-2011, estas acciones son vendidas en un 100% por Calichera Caimán que corresponde a una empresa relacionadas de Pampa Calichera en donde esta última tiene el 100% de participación de Calichera Caimán."

Asimismo, en el análisis de los conceptos que componen la cuenta se detalla el ítem "Utilidad en Venta de Accs (\*)" por MUS\$251.714 señalando que "La venta de las acciones fue realizada por empresa Pampa Caiman en



donde Pampa Calichera posee el 100% de la participación ..."agregando que "esta venta de acciones se (sic) realizado el 31-03-2011 por Banchile Inversiones (Según Factura N° 4676396), en donde se detalla la venta de 5.000.000 de acciones SQM-A a un precio unitario de 27.100 cada acción".

En esta sección, los auditores calculan la utilidad en la venta de las acciones, determinando un monto de US\$251.875.

a.1.iii) En los papeles de trabajo de la revisión analítica efectuada a los estados financieros al 30 de junio de 2011 de Oro Blanco, se señala que la variación de la cuenta "Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de la participación" se explicó por las "Compras de acciones por parte de Oro Blanco durante el primer trimestre (sic) del 2011 ..." especificándose además que "... se realizó una compra de 5.000.000 de acciones que estaban puesta en el mercado de la empresa SQM".

a.1.iv) Por otra parte, la cuenta de resultado "Ingresos financieros" de Oro Blanco, presentó un saldo de MUS\$ 242.509 que fue considerado por los auditores externos como una variación inusual, y la explicación de los auditores a dicha variación fue la siguiente: "Estos ingresos provienen principalmente por la (sic) ventas de acciones que realiza Pampa Calichera, con su empresa Calichera Caimán (sic) durante el período, en donde Oro





Blanco tiene el 88,83%, es por ello que reconoce el 100% de los ingresos financieros de Pampa Calichera, al igual que la amortización que existe por el menor valor de la inversión en SQM."

a.1.v) La cuenta de activo "Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de la participación" al 30 de junio de 2011 de Norte Grande presentó una variación importante, la cual se explicó por "el movimiento que tiene las acciones de la sociedad, este movimiento está dado por ventas y compras de acciones de los tipos A y B, ... la variación y saldo de la cuenta proviene de la información entregada por Oro Blanco". Por otra parte, la cuenta de resultado "Ingresos financieros", presentó una variación en su saldo de MUS\$200.829, y la explicación a dicha variación fue la siguiente: "Estos ingresos provienen principalmente por las ventas de acciones que realizó Pampa Calichera, con su empresa Calichera Caimán durante el período, en donde Oro Blanco tiene el 88,83%, es por ello que reconoce el 100% de los ingresos financieros de Pampa Calichera, al igual que la amortización que existe por el menor valor de la inversión en SQM."

a.2.i) En los papeles de trabajo de revisión limitada del Grupo Cascada en los que se resumen las sesiones de directorio, se hace referencia a las actas de sesiones de directorio de fecha 19 de enero de 2011 de



Pampa Calichera y Oro Blanco, en las que se presentan los detalles de transacciones que generaron discrepancias con la auditora Ernst & Young, a cargo de la auditoría del año 2010. Específicamente, se presentó en el resumen del acta de directorio de Oro Blanco la transacción de compra de fecha 23 de diciembre de 2010 de 2.500.000 acciones SQM-A a \$26.946,94 y la venta de la misma cantidad de estas acciones, el día 24 de diciembre de 2010 a \$27.800. En el resumen del acta de directorio de Pampa Calichera se indicó la transacción de venta de fecha 23 de diciembre de 2011 (sic) de 2.500.000 acciones SQM-A a \$26.946,94 y la compra de 2.503.721 de estas acciones, el día 24 de diciembre de 2011(sic) a \$27.799,55. Cabe mencionar que el año señalado para las operaciones efectuadas por Pampa Calichera fue erradamente consignado, pues estas transacciones corresponden al año 2010, de acuerdo a lo indicado en dicha acta.

a.2.ii) Asimismo, en los papeles de trabajo se resume la sesión de directorio que según los registros de PWC sería de fecha 28 de marzo de 2011 (sic) -que, como se ha visto previamente corresponde al 29 de marzo de 2011- de Pampa Calichera, indicándose, entre otros, que: "Se informa a los directores del otorgamiento de un crédito por parte de Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. a Soc. de Inv. Oro Blanco S.A. ...) Hasta por la cantidad de US\$300.000.000 (....) Luego de un breve



análisis y diferentes consultas efectuadas, se acordó por unanimidad aprobar el otorgamiento de dicho crédito aún antes de que sea materializado." El mismo tema es resumido del acta de directorio de Oro Blanco, registrada también como de fecha 28 de marzo de 2011 (sic) -que, como se ha visto corresponde al 29 de marzo de 2011-, señalándose lo siguiente: "Se informa a los directores del otorgamiento de un crédito por parte de Sociedad de inversiones Pampa Calichera S.A. a Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. (...) Hasta por la cantidad de US\$300.000.000. El directorio luego de un breve análisis acordó por unanimidad aprobar desde ya dicho crédito".

a.2.iii) Adicionalmente, en los resúmenes de visita final, particularmente de la sesión registrada con fecha 23 de noviembre de 2011 de Oro Blanco, se presenta un ítem denominado "Compra venta de acciones SQM-A", en el que señala: "Acciones vendidas: 5.000.000".

j.- En la revisión de operaciones entre partes relacionadas, se dejó establecido, sin controversia:

a.3.i) En el papel de trabajo de visita final ISA 550 "Identificar y obtener evidencia sobre las transacciones con partes relacionadas" de Norte Grande, se presentan una serie de procedimientos a ser realizados. Uno de ellos tiene el objetivo de: "Obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada sobre los riesgos de error material asociados a las relaciones y



transacciones con partes relacionadas" concluyéndose que:  
"De la lectura de actas de accionistas (como también sesiones de directorio), no hemos identificado nuevas transacciones. De la revisión de los registros contables no hemos identificado transacciones o saldos significativos o inusuales o recurrentes."

En otro ítem cuya finalidad es lograr la:  
"Identificación de partes relacionadas o transacciones significativas con partes relacionadas que no fueron identificadas o reveladas anteriormente", se concluye que: "Todas las transacciones con partes relacionadas están debidamente identificadas, estas transacciones son propias de giro del negocio de la Sociedad. Hemos realizado pruebas detalladas en los distintos Rubros de la auditoría, además hemos revisado las actas de directorio y accionistas y no hemos identificado nuevas transacciones con partes relacionadas."

a.3.ii) En el papel de trabajo "Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas" de Pampa Calichera al 31 de diciembre de 2011, se observó que los procedimientos de auditoría, consistieron en la explicación conceptual de los principales saldos y de confirmación de saldos, y en la sección denominada "Revisión transacciones entre partes relacionadas", se reprocesaron los intereses de dos préstamos otorgados por Global Mining Chile Limitada.



a.3.iii) En los papeles de trabajo de "Cuentas por cobrar a entidades relacionadas" y "Cuentas por pagar a entidades relacionadas" al 31 de diciembre de 2011 de las sociedades Oro Blanco y Norte Grande respectivamente, se presenta una explicación conceptual de los principales saldos y el procedimiento de confirmación de saldos; y en la sección denominada "Revisión transacciones entre partes relacionadas", se revisaron las partidas más significativas del total del rubro y en el caso de Norte Grande, se efectuó además el reproceso de intereses de un préstamo otorgado por Inversiones SQ S.A. que data del año 2009.

a.4 Tratamiento de utilidades operación 29 de marzo de 2011.

a.4.i) En el papel de trabajo de revisión "Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación a nivel consolidado" al 31 de diciembre de 2011 de Pampa Calichera, específicamente, el punto denominado "Revisión de las ventas de acciones efectuadas en el período", se expone que, como resultado de la transacción de venta de 5.000.000 de acciones SQM-A efectuada por Global Mining el día 29 de marzo de 2011, Pampa Calichera disminuye su participación de un 30,6388% a un 28,7391%. En virtud de esto, señalan que: "De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, un inversionista puede vender parte de su



participación en una coligada pero seguir manteniendo influencia significativa, sin que la inversión pierda la calidad de asociada. Si el interés de un inversionista en la propiedad en una asociada se reduce, pero la inversión continúa siendo una asociada, se deben realizar los siguientes pasos: (1) Reversar el valor libro de la inversión en proporción al porcentaje reducido; (2) Reconocer el valor justo del monto recibido como pago y (3) Reconocer la ganancia o pérdida correspondiente en el estado de resultados."

En este documento además se manifiesta, expresamente que: "Consideramos que el tratamiento contable dado a esta operación es adecuado en consideración a que dicho diferencial se originó en una venta al mercado que generó un incremento en los beneficios económicos durante el ejercicio bajo examen, que da como resultado un aumento del patrimonio y que dicho aumento no corresponde a un aporte patrimonial ni a transacciones patrimoniales, ya que al no existir control directo ni indirecto sobre Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM), no se puede considerar esta venta como transacciones efectuadas entre intereses controladores y no controladores." Concluye diciendo "...que el rubro Inversiones contabilizadas por el método de participación al 31 de diciembre de 2011 y resultado en venta de acciones del ejercicio 2011 es razonable."



a.5.- Revisión de transacción de venta acciones SQM-A en octubre de 2011.

a.5.i) En papel de trabajo de revisión "Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación" del saldo al 31 de diciembre de 2011 de Potasios, se adjunta factura electrónica N° 828249 de fecha 20 de octubre de 2011, por la compra de 5.000.000 de acciones SQM-A.

a.5.ii) Además, en el papel de trabajo del rubro "Otras Ganancias (pérdidas)" al 31 de diciembre de 2011 de Oro Blanco, se observó que parte de la validación de la cuenta "Pérdida en venta de acciones", consistió en revisar la factura electrónica N° 878250 de fecha 20 de octubre de 2011, por la venta de 5.000.000 de acciones SQM-A.

b) Papeles de trabajo asociados a división de Pampa Calichera.

El papel de trabajo que contiene la revisión del movimiento patrimonial de Potasios y en el cual se analiza la división de Pampa Calichera, presenta la validación del movimiento patrimonial al 31 de diciembre de 2011. Dicha validación consistió en el reproceso aritmético y referencias hacia el papel de trabajo de lecturas de actas.

c) Papeles de trabajo asociados a los Estados de Flujo Efectivo.



En los papeles de trabajo presentados no se constató evidencia relativa a la revisión de los Estados de Flujos de Efectivo de Pampa Calichera, Oro Blanco, Norte Grande y Potasios.

j.- La Resolución Exenta N° 223, de 20 de julio de 2015, objeto de la reclamación concluyó:

"18.- Que, considerando los hechos expuestos en función de los deberes y obligaciones a que se ven afectas las empresas de auditoría externa y sus socios, resulta clara la falta de diligencia de PWC y del socio a cargo del equipo que revisó y auditó a las sociedades del Grupo Cascada, Sr. Javier Gatica Menke, en la realización de los diversos procesos, pruebas de auditoría y evaluación crítica de la evidencia obtenida, en la labor efectuada en las revisiones limitadas y en los informes de auditoría externa de los estados financieros y sus notas explicativas al 30 de junio de Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande, y al 31 de diciembre de 2011 de Potasios, Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande, exhibiendo, en tal sentido, ausencia del requerido escepticismo profesional que exige dicha función.

19.- Que, lo precedentemente expuesto derivó en que PWC y su socio Sr. Javier Gatica hayan infringido: i) las diversas NAGAS imputadas en los cargos, en relación a los deberes de cuidado establecidos en los numerales 1) y 3) del artículo 55 y 1) y 2) del artículo 56 del Reglamento





de Sociedades Anónimas vigente a la época de los hechos en la revisión de los estados financieros consolidados de Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A., Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. y Norte Grande S.A. a junio de 2011 y ii) la NAGAS imputadas en los cargos en relación los artículos 239, 246 y 248 de la ley N° 18.045 en la emisión de los informes de auditoría a diciembre de 2011 de las citadas sociedades y de Potasios de Chile S.A.”

En lo dispositivo resuelve:

1.- Aplica a PriceWaterhouseCoopers Consultores Auditores y Compañía Limitada la sanción de multa a beneficio fiscal, ascendente a UF 2.000, pagadera en su equivalente en pesos a la fecha efectiva de su pago, por:

i) Infracción a lo dispuesto en párrafos de las secciones de las NAGAS objeto de cargos, en relación a los numerales 1 y 3 del artículo 55 y 1) y 2) del artículo 56 del D.S. 587 de 1982 Reglamento de Sociedades Anónimas vigente a la época de los hechos, en la revisión limitada de los estados financieros de Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A., Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. y Norte Grande S.A. a junio de 2011;

ii) Infracción a lo dispuesto en los párrafos de las secciones de las NAGAS objeto de cargos en relación a los artículos 239, 246 y 248 de la Ley 18.045, en la emisión de la opinión de auditoría sobre los estados financieros



de las sociedades Potasios de Chile S.A., Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A., Sociedad de Inversiones Oro Blanco y Norte Grande S.A. referidas al 31 de diciembre de 2011; y

iii) Infracción a lo dispuesto en el literal (i) del inciso tercero del artículo 240 de la Ley 18.045.

2.- Aplica a don Javier Gatica Menke la sanción de multa a beneficio fiscal, ascendente a UF 1.500, pagadera en su equivalente en pesos a la fecha efectiva de su pago, por:

i) Infracción a lo dispuesto en párrafos de las secciones de las NAGAS objeto de cargos, en relación a los numerales 1 y 3 del artículo 55 y 1) y 2) del artículo 56 del D.S. 587 de 1982 Reglamento de Sociedades Anónimas vigente a la época de los hechos, en la revisión limitada de los estados financieros de Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A., Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. y Norte Grande S.A. a junio de 2011; y 2011; y

ii) Infracción a lo dispuesto en los párrafos de las secciones de las NAGAS objeto de cargos en relación a los artículos 239, 246 y 248 de la Ley 18.045, en la emisión de la opinión de auditoría sobre los estados financieros de las sociedades Potasios de Chile S.A., Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A., Sociedad de Inversiones



Oro Blanco y Norte Grande S.A. referidas al 31 de diciembre de 2011.

**k.-** Reclamada que fue la resolución aludida precedentemente, el tribunal de primera instancia la rechazó, por cuanto la transgresión de los principios jurídicos que alude, "a través de la comisión de las infracciones ya constatadas en la presente sentencia y entendiéndose que aquellas revisten un carácter de gravedad, toda vez que afectan la eficiencia y correcto funcionamiento del mercado de valores nacional".

**l.-** La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la expresada determinación, dando por establecido, en un contexto general, que los auditores externos, forman parte fundamental del proceso de información al mercado, incidiendo su labor en el proceso de formación del capital. Su función básica radica en la emisión de su opinión profesional e independiente, lo que importa revisar si las operaciones se encuentran reflejadas razonablemente, velando para que los estados financieros se preparen de acuerdo a los principios y normas generalmente aceptadas y a las instrucciones dictadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (hoy CMF). Se les exige actuar con el máximo de diligencia, debiendo responder de acuerdo con el artículo 53 inciso tercero de la Ley 18.046 de culpa leve por los perjuicios que causaren.



Es por lo anterior, sigue la Corte, que a los auditores externos se les impone actuar con escepticismo profesional, tal como lo refieren los testigos de la demandada, lo que refuerza su independencia y objetividad y aumenta la confianza de los usuarios, tratándose de una actitud esencial para poder identificar e informar situaciones indicativas de posibles incorrecciones. El escepticismo profesional importa una actitud que incluye una mentalidad inquisitiva y evaluación crítica de la evidencia, con un continuo cuestionamiento sobre si la información sugiere fraude o error.

Precisamente es en ese contexto, que la información de que disponían en relación a la naturaleza de sus funciones y la responsabilidad que ésta lleva consigo, imponía revisar la evidencia con espíritu crítico, y ante la concurrencia de variados antecedentes que alertaban sobre la situación, examinarlas a fondo, lo que no se cumplió, sin que se cuestione el resultado, sino que la falta de diligencia en el trabajo que debían cumplir.

Sobre la base de la prueba rendida también dan por establecido los jueces de segundo grado la inexistencia de papeles de trabajo que respalden los descargos de la reclamante y que la Resolución reclamada deja constancia que la propia literatura técnica de la auditora le sugería que no necesariamente la estructura de una operación correspondía a su esencia económica, por lo que



la diferencia de precios no podía ser definitiva para concluir si en esencia no habían sido contrapartes de una misma operación. Se concluye y tiene por establecido que todos los antecedentes mencionados y en base a la propia literatura técnica del auditor, debió efectuar pruebas que le permitieran analizar la esencia de la operación, y que en ninguno de los papeles de trabajo, tanto de la revisión limitada como de la anual, existe evidencia de auditoria que demuestre que ello efectivamente se efectuó.

Argumentan los jueces que tales conclusiones se desprenden, además, considerando: a) que PWC tuvo en antecedente que la venta y compra de acciones SQM-A fue efectuada el mismo día, por el mismo volumen de acciones, a través de la misma corredora de bolsa; b) que generaron resultados materiales en los Estados Financieros en las sociedades implicadas; c) que Pampa Calichera y Oro Blanco tenían en mismo Gerente General; d) que los flujos que se generaron en la venta de los títulos SQM-A financiaron la transacción de compra de Oro Blanco- mediante un préstamo desde Global Mining a Pampa Calichera y finalmente a Oro Blanco-, y e) que en Diciembre de 2010 y enero de 2011 se realizaron transacciones con las mismas sociedades, habiendo incluso E&Y objetado el tratamiento contable dado a la operación de diciembre de 2010.



Sigue razonando la Corte, en el sentido que la investigación se dirigió a la labor y obligaciones que como auditores externos competía a los demandantes. Expresa que la sanción aplicada lo fue por no haber efectuado su labor con razonable cuidado y diligencia, frente a los hechos constatados, al no haber actuado de "manera crítica e inquisitiva" al evaluar, interpretar y determinar los resultados de diversas pruebas de auditoría desarrolladas para emitir su informe de revisión de información financiera intermedia y opinión final de los estados financieros de las Sociedades Cascada, imputándoles no haber actuado de acuerdo a las NAGAS al no realizar pruebas esenciales para evaluar correctamente la razonabilidad de los saldos contenidos en los estados financieros de las Sociedades Cascada. No se trata de discrepancias en la interpretación técnica de las normas, sino que del cumplimiento del nivel de diligencia y debido cuidado que les era exigible, que el ente administrativo representa a través de las pruebas que debieron efectuarse, conforme a la propia literatura técnica de los demandantes y la opinión del testigo señor Marchese, conducentes a determinar si el mercado en que se efectuaron las operaciones era efectivamente un mercado abierto; como se relacionaban las operaciones efectuadas por las Sociedades Cascada; quienes eran las contrapartes de la operación; cuál era la relación entre



los participantes de las operaciones; podía existir una relación significativa entre las partes; se habían negociado previamente las operaciones, considerando, además, que la auditora y el señor Gatica tenían a su cargo la revisión de los estados financieros de todas las compañías del Grupo Cascada y acceso a las Actas de Directorio de todas ellas.

Justifican sus conclusiones los magistrados señalando que, a los variados antecedentes que alertaban sobre la situación, ya mencionados en este fallo y en la Resolución sancionatoria, cabe añadir lo expuesto por los testigos presentados por la demandada, quienes refirieron la incidencia de la operación cuestionada en el resultado del ejercicio (en términos que una única operación explicaba el 66% del resultado, por ejemplo), las discrepancias técnicas de la administración con los auditores anteriores en relación a transacciones del mes de diciembre de 2010 y por último, la naturaleza de las acciones transadas que implicaban el control de la sociedad emisora, tratándose de acciones preferentes que eligen 7 de los 8 directores en SQM, muy poco liquidadas en el mercado, transándose en pocas oportunidades en el año, normalmente en bajas cantidades.

Concluyen los magistrados de la Corte de Apelaciones que, conforme a lo expuesto, no se verifican en la Resolución impugnada los defectos que se denuncian en la



demanda de fojas 1 a 57 vuelta, encontrándose su monto ajustado a los márgenes legales, considerando que mediante Resoluciones Exentas N° 63 de 9 de marzo de 2012 y 61 de 19 de febrero de 2014 el ente administrativo sancionó con multa a la auditora por hechos coetáneos a aquellos del proceso de autos, según consta en el numeral 22 de la resolución sancionatoria.

**Segundo:** Que, en el recurso de casación en el fondo, en primer lugar, los actores denuncian la infracción a lo dispuesto en el artículo 29 en relación con el 27, 4, 7, 8, 10 y 16 todos de la Ley N° 19.880 fundado en que la sanción reclamada fue impuesta en forma extemporánea. Sobre el particular, señalan que los sentenciadores incorrectamente rechazaron la concurrencia del vicio de legalidad reclamado en la demanda, en relación a la extemporaneidad de la actuación administrativa y sanción impuesta, habiéndose producido el decaimiento del procedimiento administrativo, desde que se acreditó en el proceso que la SVS nunca dictó el acto administrativo individualizado en el artículo 29 de la Ley N° 19.880, esto es, el "Acuerdo de iniciación" del procedimiento administrativo que se siguió en contra de PwC, pretendiendo asimilar toda actuación de instrucción anterior a la formulación de cargos en lo que la misma Ley individualiza como "período de información previa"; no obstante haber transcurrido más de 2 años y 8 meses





contados desde los primeros actos de instrucción sin formularse cargos, y 3 años y 4 meses sin que se haya dictado resolución terminal del procedimiento.

Por lo anterior, no habiéndose cumplido con la emisión del acto administrativo que la Ley exige para iniciar la fase de instrucción del procedimiento sancionatorio que se siguió efectivamente en contra de PwC y que necesariamente debe preceder a la formulación de cargos, señala que la SVS ha pretendido atribuir toda intervención, requerimiento de información e incluso instrucciones transmitidas a PwC a partir del 26 de marzo de 2012, a lo que el artículo 29 de la Ley N° 19.880 denomina "período de información previa", lo que no resulta plausible, desde que éste tiene por objeto "conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento" el cual debió iniciarse a través del Acuerdo de Iniciación, lo que no aconteció.

El plazo de duración del procedimiento administrativo, excede todo límite de razonabilidad, contrariando los principios de celeridad, conclusivo, contradictoriedad, transparencia, publicidad, previstos en los artículo 4, 7, 8, 10, 16 de la Ley N° 19.880, por lo que correspondía declarar la extinción y pérdida de finalidad ontológica y eficacia del procedimiento administrativo culminado con la dictación de la



Resolución Exenta N° 223, por haberse verificado su decaimiento.

**Tercero:** Que, a continuación, se denuncia errónea aplicación del inciso tercero del artículo 13 y artículo 56 de la Ley N° 19.880, e infracciones a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, por resultar ilegal la reformulación de cargos.

Explica que la sentencia recurrida desestima la infracción denunciada al principio de legalidad en razón de la reformulación de cargos efectuada mediante Oficio Reservado N° 069 de 23 de enero de 2015, aduciendo que ésta se habría realizado al amparo de los artículos 13 y 56 de la Ley N° 19.880, otorgando un nuevo período para evacuar descargos, haciéndose efectivo el derecho de defensa.

Contrariamente a lo concluido en la sentencia recurrida, la reformulación de cargos tuvo su origen en que, al contestar los cargos originales, alegó la improcedencia de los mismos, atendiendo, entre otras consideraciones, a errores como el que los cargos se fundaban en la infracción al principio de "esencia sobre la forma", el cual se encontraba a la sazón derogado.

En razón de lo anterior, la reformulación de cargos no puede ser considerada como inocua para el ejercicio del derecho de defensa como se sostiene en la sentencia, desde el momento en que la sola rectificación de



referencias al principio "Esencia sobre la forma" por "Representación fiel", como se plasmó en la reformulación de cargos, excede los límites de una mera "cita errada" permitida por los artículos 13 y 56 de la Ley N° 19.880.

**Cuarto:** Que, en tercer lugar, el recurso de nulidad sustancial denuncia que la sentencia recurrida infringió lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley N° 19.880, al haber desestimado erróneamente los puntos de prueba solicitados por el reclamante y medios de prueba durante el procedimiento administrativo.

Explica que, como vicio de legalidad del procedimiento administrativo, alegó que resultaba improcedente el habersele rechazado la solicitud de agregar un punto y medios de prueba, lo que fue rechazado en el considerando duodécimo de la sentencia recurrida por haberse estimado que ello se enmarca en el ejercicio de las facultades discrecionales con que cuenta la administración en la materia, conforme al tenor del artículo 35 de la ley 19.880.

Desarrolla en su recurso que el punto de prueba solicitado en el procedimiento administrativo, consistía en que se rindiera prueba acerca del "Ajuste formal de las operaciones involucradas en los cargos comunicados mediante oficio Reservado N° 1534/2014, a la normativa que regula las transacciones bursátiles", prueba que -a su juicio- habría podido acreditar las características de



las operaciones cuestionadas y, como consecuencia, cuáles deberían ser su encuadramiento según normas contables y los procedimientos que el auditor debe conforme a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (en adelante NAGAS).

Puntualizó que el ajuste formal de las operaciones a las solemnidades y normativas que en materia bursátil las regula, es un aspecto relevante que el auditor debe considerar en la evaluación de las evidencias de auditoría examinadas en el curso de su labor, pues ello permite determinar si las operaciones cuyo registro contable fueron cuestionadas fueron realizadas efectivamente en un mercado abierto, supuesto que requiere el que se acredite que cumplieron con la normativa que regula las transacciones bursátiles.

Finalmente, señala sobre el particular que el artículo 35 de la Ley N° 19.880, se trata de una norma establecida en beneficio de los particulares frente a la Administración, por lo que su inobservancia compromete los principios y reglas referentes al debido proceso, perjudicándose además la presunción de inocencia, al rechazar hechos que hayan sido introducidos como fundamentos de las pretensiones de los administrados, en una etapa anterior a aquella en la cual debe verterse la decisión final.



**Quinto:** Que, a continuación, se denuncia la infracción al artículo 28 del D.L. N° 3.538 en relación con los artículos 239, 246 y 248 de la Ley N° 18.045.

Refiere que la Resolución Exenta N° 223 fundamenta las multas por ella impuestas en la infracción, entre otras disposiciones, a los artículos 239, 246 y 248 de la Ley N° 18.045, que describen la naturaleza jurídica de la labor de auditoría, y los deberes que, en dicho ejercicio, deben observarse por las empresas auditoras.

Por su parte, los considerandos décimo tercero a vigésimo de la sentencia recurrida, la Corte de Apelaciones de Santiago valida el criterio esgrimido por la SVS para sancionar a PwC y al socio a cargo de la auditoría cuestionada, ratificando primero ciertos hechos de la causa y calificándolos luego como constitutivos de una supuesta falta de diligencia en la labor de auditoría practicada por los reclamantes, que no le asisten a los reclamantes, de conformidad a los artículos 239, 246 y 248 de la Ley N° 18.045.

Señala que, durante el procedimiento administrativo y en la reclamación judicial, se discutió ampliamente acerca de si el trabajo realizado por las reclamantes se ajustó o no a las NAGAS y a las Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting Standards - IFRS), ya que dependerá del tratamiento técnico de las transacciones, los procedimientos de



auditoría y evidencias que se requieran para su revisión, los que constituyen parámetros que deben observarse, conforme a la ley y a las instrucciones impartidas por la SVS, para, a partir de ellos, determinar si los actores actuaron con razonable cuidado y diligencia en su labor de auditoría.

Asegura que el reproche realizado en la sentencia, en cuanto a que no habría "analizado el trasfondo económico de las transacciones efectuadas", ante operaciones que no implicaron la enajenación efectiva de acciones fuera del grupo Cascada, fueron asimiladas por la SVS y por los jueces del fondo a operaciones simuladas.

De lo anterior, advierte una insalvable contradicción en la sentencia, desde que, por una parte, se ha dicho que no se trata de discrepancias en la interpretación técnica de las normas, sino que del cumplimiento del nivel de diligencia y debido cuidado que les era exigible, y por el otro, en el considerando décimo quinto, se reprocha el no efectuar pruebas que le permitieran analizar la esencia de la operación.

Al respecto, alega que, tratándose ambas operaciones de transacciones de entidades que son partes relacionadas entre sí con terceros independientes, a través de una operación de mercado abierto, no es factible de ser consideradas como operaciones entre partes relacionadas,



ya que prevalece la presunción de que cada una fueron efectuadas entre terceros independientes.

Además, las pruebas que han de efectuarse y cuya supuesta ausencia reprocha la sentencia recurrida dependen de la interpretación técnica de las normas que deben seguir los auditores de acuerdo a la Ley N° 18.045, y sin que exista infracción a dicha ley, no es posible sancionar de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 del D.L. N° 3.538 vigente al momento de haber incurrido en las supuestas infracciones.

Asegura que la labor de auditoría supone la emisión de una opinión profesional e independiente, y las "pruebas" que según el fallo recurrido debieron ser efectuadas, son exigidas con ocasión de una discrepancia técnica, relacionada principalmente si, en razón de los antecedentes existentes era o no posible concluir si el mercado en que se efectuaron las operaciones era efectivamente un mercado abierto.

Enfatiza que la sentencia recurrida ratifica la decisión de sanción de la SVS, desvinculando el contenido de la opinión sobre la presentación general de la contabilidad y de los estados financieros auditados -que es la obligación que le asiste conforme al literal c) del artículo 239 de la Ley N° 18.045- con el deber de cuidado o diligencia requerido para emitir dicha opinión.



La conclusión anterior es explicada por el recurrente, en el hecho que sentencia recurrida reprocha a la auditora la supuesta ausencia de realización de ciertas pruebas tendientes a determinar el trasfondo económico de las transacciones, pero le resta toda relevancia a la interpretación técnica de las normas que determinan precisamente si es necesario realizar ciertas pruebas ante determinadas transacciones y la clase de pruebas que corresponde efectuar.

De esta forma, sostiene que al haberse estimado configuradas las infracciones sancionadas, conforme a los artículos 239, 246 y 248 de la Ley N° 18.045, se infringe precisamente el artículo 28 del D.L. N° 3.538 vigente al momento de haberse incurrido en las supuestas infracciones a aquellos artículos de la Ley N° 18.045.

Aclara que no se está discutiendo en el recurso de casación si la sentencia recurrida infringe las NAGAS y demás normas técnicas aplicables a la labor de auditoría, sino se reprocha que la sentencia haya confirmado una sanción prescindiendo expresamente de la necesidad de que se haya verificado un actuar contrario a tal normativa técnica para poder determinar la responsabilidad administrativa de los reclamantes.

En resumen, los estados financieros y transacciones de las empresas deben contabilizarse y reflejarse en función de las normas contables vigentes, esto es,





conforme lo instruido por la SVS, de acuerdo IFRS. El auditor debe dictaminar por lo tanto si dichos estados financieros cumplen con las IFRS, aplicando las normas de auditoría vigentes (NAGAs) para seleccionar los procedimientos que corresponden aplicarse en función de las características de las operaciones, precisamente bajo la norma técnica IFRS.

Por consiguiente, desligarse de la discusión técnica y evaluación para concluir una falta de diligencia o cuidado por la supuesta ausencia de prueba como pretende la sentencia, supone, en definitiva, infringir las disposiciones legales antes citadas que son las que fijan precisamente las obligaciones de los auditores.

Agrega que se está sancionando a la auditora por no estar de acuerdo en la posición que ha asumido la SVS en relación a considerar estas operaciones como entre partes relacionadas, en circunstancias que aquella calificación responde al estudio de un patrón de conductas reiterado en un intervalo de tiempo más amplio que el auditado por los actores, ejerciendo respecto del fiscalizado amplias facultades de investigación para concluir la existencia de un "esquema" que decidió sancionar, y que dicha calificación de las operaciones como efectuada entre partes relacionadas ha sido refutada por los Tribunales de Justicia.



Luego, no es exigible el haber efectuado "pruebas adicionales" para refutar una posición técnica de la SVS de la cual razonablemente la auditora discrepa, más aún cuando el sustento de aquella pretensión escapa del ámbito de la labor del auditor, desde que se le impone la obligación de detectar supuestos esquemas de fraudes, propio para una auditoría forense y no para una auditoría externa de las regladas en los artículos 239, 246 y 248 de la Ley N° 18.045.

A continuación, a efecto de ilustrar su posición técnica sobre la materia, analiza tres casos en que existe transacciones que podría encuadrarse en una compraventa de acciones que no otorgan al inversionista el control, sino influencia significativa, como es el caso de las empresas auditadas que motivaron la sanción reclamada, cuales son compraventa entre partes independientes, compraventa entre partes relacionadas y compraventa simulada o ficticia, explicando su tratamiento conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

En caso de las compraventas simuladas, que fue el impuesto por la SVS en los oficios Ordinarios N° 10198, 10200, 10201 y 10207, todos de fecha 20 de abril de 2012, en los que ordenó reversar los efectos contables de las operaciones cuestionadas efectuadas el 29 de marzo de 2011 de Pampa Calichera y Potasio, sobre la base de



considerarlas simuladas o inexistentes. Lo anterior, pues desde el punto de vista contable, deben deshacerse todos los efectos financieros como si las transacciones nunca hubiesen existido, opción que fue adoptada por la SVS y comunicada a PwC al requerirlo a través de los Oficios antes individualizados.

La vulneración por parte de la SVS a la doctrina de los actos propios e infracción al principio de confianza legítima se verifica entonces en razón de la incongruencia que se evidencia. Por una parte, la SVS, instruyó mediante Oficios antes referidos reversar la totalidad de los efectos financiero-contables de las transacciones, a todas las sociedades, incluyendo matrices y filiales, toda vez que estas transacciones serían simuladas o inexistentes. Sin embargo, por otra parte, la SVS formuló cargos, y sancionó mediante Resolución Exenta N° 223 a PwC y al socio a cargo de la auditoría, Javier Gatica Menke, por no haberse cuestionado si a dichas operaciones correspondía tratarlas como operaciones entre partes relacionadas y revelarlas en dicha condición, lo que supondría reversar la operación solo a nivel consolidante, debiendo reconocerse a la transacción entre las intervinientes a nivel de resultados.

En definitiva, en el caso de operaciones entre partes relacionadas, se está frente a operaciones



existentes, y en caso de las simuladas de operaciones inexistentes. Al haber ordenado la SVS en abril de 2012 revertir la totalidad de los efectos financiero - contables de las transacciones, está asumiendo la posición jurídico contable de que se encuentra ante operaciones inexistentes, por lo que resulta contradictorio que en julio de 2015 se reproche a los reclamantes no revelarla como una operación existente, pero entre partes relacionadas.

Se afirma que PwC y el Sr. Gatica, por haber tenido información suficiente que les permitía presumir que las transacciones realizadas el día 29 de marzo de 2011 no conllevaron la enajenación efectiva de las acciones fuera del Grupo o Sociedades Cascada, no habrían actuado con razonable cuidado y diligencia, al no cuestionar si dichas transacciones podrían obedecer a operaciones entre partes relacionadas, limitándose a validar los criterios utilizados por la entidades sujetas a su revisión.

En tal sentido, informó la Superintendencia en su formulación de cargos que, a partir del principio de la "esencia sobre la forma", dispuesto en el "Marco Conceptual para la Información Financiera" de las IFRS, las transacciones con el título SQM-A efectuadas el día 29 de marzo de 2011, deberían haber sido tratadas como transacciones entre empresas relacionadas y, en consecuencia, determinar que éstas deberían haber sido



registradas de acuerdo a ello y reveladas según lo dispuesto en los párrafos 17, 18, 20 y 21 de la NIC 24 en los estados financieros a junio y diciembre de 2011 de Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande, como también, que los resultados de dichas operaciones no deberían ser consolidados en los estados financieros de Oro Blanco y Norte Grande, de acuerdo a lo previsto en los párrafos 20 y 21 de la NIC 27.

Lo anterior, sin perjuicio de que el deber de registro que los reclamantes no habrían advertido que, se contradice sustancialmente con el tratamiento de operaciones simuladas o inexistentes, siguiéndose de aquello una incongruencia entre los cargos formulados, la sanción comunicada, y su propio actuar anterior.

A continuación, describe las operaciones, de acuerdo al detalle contenido en la resolución sancionatoria y en la sentencia recurrida.

Respecto a las operaciones efectuadas el 29 de marzo de 2011, asegura que en caso alguno podría PwC haber presumido que las referidas operaciones eran engañosas o fraudulentas, ni mucho menos haber acusado a los prestigiosos agentes de mercado que intervenían, de haber perpetrado actos ilícitos, sin tener los fundamentos ni las facultades para hacerlo, proceder que fue refrendado por la sentencia dictada en 23 de febrero de 2020 por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago,



que absolvió al Sr. Aldo Motta Camps, a la sazón Gerente General de las sociedades cascadas desde agosto de 2009 a diciembre de 2011, de la imputación de haber participado en operaciones ficticias, simuladas o engañosas, mismas operaciones que son las reprochadas por la SVS a PwC.

Asegura que, en la misma línea, los tribunales civiles han acogido las reclamaciones presentadas por los corredores de bolsa en contra de las sanciones cursadas por la SVS en el Caso Cascadas. Precisa que, en sentencia dictada por el 29° Juzgado Civil de Santiago en causa Rol C 21.500-2014, se dejaron sin efecto las sanciones impuestas a Larraín Vial Corredores de Bolsa S.A. y a don Leonidas Vial, en la que se concluye que no corresponde trasladar a terceros la carga jurídica de determinar las intenciones propias de sus clientes, cuando en la celebración de determinados actos se ha dado cumplimiento a todos los requisitos y formalidades necesarias para que surtan efectos. Criterio similar al sostenido en la sentencia dictada por el 23° Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol C 21.498-2014, que dejó sin efecto la sanción impuesta a los ejecutivos de la misma corredora.

Reitera que no es posible para el Auditor externo, como pretende la sentencia recurrida, acceder a información presuntamente oculta o no revelada por la administración, dentro de los objetivos y alcances de una auditoría de estados financieros, y con las facultades



que la ley le otorga en los artículos 239, 246 y 248 de la Ley N° 18.045, máxime si ésta está en manos de terceros no objetos de la auditoría.

Sin embargo, dentro del límite propio de la auditoría practicada, las operaciones de venta y compra de acciones de SQM-A realizadas el día 29 de marzo de 2011 no fueron inadvertidas por la auditora y fueron debidamente analizadas en su mérito con los alcances requeridos por las NAGAs, de todo lo cual dan cuenta los papeles de trabajo respectivos, parte de los cuales son referidos en el Título iii del Capítulo V de la resolución sancionatoria, documentando hechos objetivos e información accesible conforme a las facultades y atribuciones propias de esta labor, siendo el reproche formulado por la SVS y la sentencia recurrida la falta de realización de determinadas pruebas que escapan de aquellas requeridas conforme a las NAGAs.

En cuanto a las operaciones fundantes de la sanción impuesta, realizadas con fecha 20 de octubre de 2011, asegura que la opción del método contable a utilizar en la división de una sociedad, es de exclusiva facultad de las sociedades involucradas, conforme a NIC 8. Adicionalmente, la elección de los activos y pasivos que se asignan a cada una de las entidades que surgen de la división, como así también la manera en que se dividen las cuentas patrimoniales, es decisión soberana de la



Junta de Accionistas que acuerda la división, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 57 N° 2, y 94 y siguientes de la Ley N° 18.046.

En relación a esta materia, la SVS reprochó a los actores que Pampa Calichera "sólo registró la disminución patrimonial en las cuentas del Balance, no así en el Estado de Resultado, incluyendo éste la totalidad del resultado del ejercicio y, por ende no reflejando la rebaja de la utilidad del ejercicio correspondiente al traspaso efectuado a Potasios".

Asegura que el método que la SVS sugiere debió aplicarse, corresponde a una práctica informal en desuso empleada cuando se aplicaban los principios contables chilenos, mas no corresponde su utilización una vez que Chile ha adoptado las IFRS conforme el propio mandato de la SVS. Es por ello que la SVS no ha encontrado ninguna norma ni literatura relevante internacional que avalen su posición.

La improcedencia de la sanción por este reproche fue tratada tanto en la reclamación como en la apelación, no obstante ni la sentencia de primera instancia ni la de segunda abordan dicha materia, centrándose esta última únicamente en el cargo relativo a "no cuestionar si las transacciones efectuadas los días 29 de marzo y 20 de octubre de 2011 podrían obedecer a operaciones entre partes relacionadas".





Retomando el análisis de las operaciones realizadas el 20 de octubre de 2011, señaló que Potasios compró 5.000.000 de acciones SQM-A, cuyo precio habría sido pagado principalmente mediante la compensación del crédito que tenía con Oro Blanco que le fuera asignado en la división de Pampa Calichera.

La evidencia que PwC tuvo a la vista, fue que las operaciones se habían realizado en el mercado bursátil, que da a entender, que las operaciones se realizaron en bolsa a través de corredores.

La SVS sugiere que la sola referencia a la operación del día 20 de octubre de 2011 debe entenderse efectuada en el contexto de un cúmulo de elementos necesarios que "hubiese permitido a PwC presumir" que finalmente las operaciones efectuadas con el título SQM-A por las sociedades Pampa Calichera, Oro Blanco y Potasios no habrían tenido el objetivo de transferir la propiedad de dichas acciones, presentando características de transacciones simuladas o inexistentes, criterio que fue justificado por la sentencia recurrida, lo que supone imponer a la auditora, obligaciones que exceden el marco de actuación establecido en los artículos 239, 246 y 248 de la Ley N° 18.045, pues entienden que debió haber primado en el análisis efectuado la realidad cubierta por la simulación por sobre los aspectos formales, legales, tributarios y de instrumentación en el mercado abierto.



En dicha pretensión, que excede entonces la labor de auditoría, se verifica entonces la infracción de Ley que motiva la casación de la sentencia recurrida a este respecto.

Precisó que el hecho que las acciones hayan reingresado al grupo no cambia la realidad de haber sido transadas con un "trader" y de haber estado expuestas - principalmente las de marzo de 2011- al riesgo de pérdida de control, que es una de las condiciones esenciales, que le atribuyen a las transacciones, desde el punto de vista financiero contable, la aptitud de ser tratadas como efectuadas entre partes no relacionadas o independientes.

Agrega que, a diferencia de las operaciones de diciembre de 2010 donde Pampa Calichera recompró las acciones; en las de marzo de 2011 no se verificó una recompra de las acciones por el primitivo vendedor, por lo que resulta improcedente que se pretenda confundir la transacción de diciembre 2010 con la de marzo de 2011, dando a entender que fueron equivalentes, cuando en la realidad revisten caracteres distintos.

Recuerda que el deber del auditor, conforme al artículo 239 de la Ley N° 18.045, es emitir sus conclusiones respecto de la presentación de los estados financieros, de acuerdo a los antecedentes que los justifican, y que, lógicamente, dicen relación con el período auditado, no pudiendo extrapolarse conclusiones



efectuadas respecto de ejercicios anteriores en relación a operaciones que, por lo demás, son totalmente distintas.

Asegura que no es rol del auditor desentrañar el presunto trasfondo económico de las transacciones en un caso de estas características, donde se habrían realizado operaciones legal, tributaria y reglamentariamente válidas, pero presuntamente simuladas utilizando a un tercero como intermediario (Linzor), quien participó en la transacción en el mercado bursátil.

Asegura que la sentencia recurrida pretende imponer a los reclamantes una obligación de resultados, esto es, que necesariamente debían concluir que las transacciones eran simuladas, sin considerar que los deberes del auditor son solo de medios, aquellos que establecen las normas a que se refieren los artículos 239, 246 y 248 de la Ley N° 18.045.

Para intentar establecer esta supuesta obligación de desentrañar el trasfondo económico de las operaciones y reprochar a la auditora el no haberlas representado como transacciones entre partes relacionadas, la SVS recurre a la característica de "Representación fiel" del Marco Conceptual para la Información Financiera, lo que, según el IASB14 (interpretación específica -14- emitida por el International Accounting Standards Board) es una de las "Características cualitativas de la información



financiera útil" y no así un "principio", como pretende la reclamada.

Agrega que el Marco Conceptual no es NIIF, sino una característica general deseable en la información, la cual no tiene un valor normativo. En definitiva, el Marco Conceptual puede ayudar a los auditores en la formación de una opinión acerca de los estados financieros respecto de IFRS, pero siempre prevalece las IFRS sobre aquél (también denominadas como NIIF).

A lo anterior agrega que se impone una sanción a los reclamantes, incurriéndose en un sesgo retrospectivo, apartándose de los deberes que efectivamente le imponen los artículos 239, 246 y 248 de la Ley N° 18.045.

Finalmente, en relación al cargo relativo al "Estado de Flujo de Efectivo", fue desvirtuado en el Capítulo IV.5. de la reclamación y en el Capítulo IV.5. del recurso de apelación, no refiriéndose a él ni la sentencia de primera ni la de segunda instancia.

**Sexto:** Que, en quinto lugar, se denuncia la infracción a las normas reguladoras de la prueba, previstas en el artículo 342 N° 3 del Código de Procedimiento Civil y artículo 1.700 del Código Civil, en relación con el inciso cuarto del artículo 41 de la Ley N° 19.880, al no haberse valorado la cuantiosa prueba documental acompañada por su parte, y no objetada por la



contraria, por estimar que se trata de opiniones emitidas por profesionales, lo que constituye un grueso error.

Precisa que este yerro fue cometido al habérsele desconocido valor probatorio a los Oficios Ordinarios SVS N° 10.198, 10.200, 10.201 y 10.207 de fecha 20 de abril de 2012, de los que se evidencia el actuar contradictorio de la Superintendencia denunciado en los capítulos precedentes, con lo que se infringió el principio de confianza legítima en la administración y el deber de fundamentación de los actos administrativos, conforme lo mandata el inciso cuarto del artículo 41 de la Ley 19.880.

Asegura que el mismo error también se produjo al no haberse valorado las Facturas N° 4676394 y N° 4676395, ambas emitida el 29 de marzo de 2011, las que evidencian la diferencia entre las transacciones de marzo de 2011 con las de diciembre de 2010, discrepancias que evidencian que el auditor no debía calificar las operaciones como realizadas entre partes relacionadas.

**Séptimo:** Que, al explicar cómo los yerros jurídicos denunciados tuvieron influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, señala que ellos motivaron el rechazo de un reclamo que debió ser acogido, en tanto no existían elementos para tener por acreditados los hechos a que se refiere la resolución de multa.



**Octavo:** Que, para una debida comprensión de las materias jurídicas de que trata el recurso, es conveniente iniciar su estudio teniendo presente que en estos autos, la consultora PricewaterhouseCooper o PwC y don Javier Gatica Menke, dedujeron reclamación de conformidad al artículo 30 del Decreto Ley N°3.538, en contra de la Resolución Exenta N° 223 de 20 de julio de 2015 emitida por la SVS que los sancionó por no haber actuado con razonable cuidado y diligencia en el análisis de las características e implicancias de las transacciones efectuadas los días 29 de marzo y 20 de octubre de 2011, al no observar ningún cuestionamiento en cuanto al fondo de estas operaciones, lo cual no habría permitido obtener satisfacción de auditoría suficiente que confirmase que la información financiera estuviera adecuadamente revelada.

**Noveno:** Que, entrando al análisis de los vicios denunciados en el recurso, corresponde, en primer lugar, emitir pronunciamiento respecto a las sindicadas en el recurso como infracciones de las leyes relacionadas con la prueba, para, a partir de ello, reflexionar sobre los restantes yerros denunciados. Al respecto, debe consignarse que, como lo ha reconocido reiteradamente esta Corte, se entienden vulneradas las normas reguladoras de la prueba, fundamentalmente cuando los sentenciadores invierten el onus probandi, rechazan las



pruebas que la ley admite, aceptan las que la ley rechaza, desconocen el valor probatorio de las que se produjeron en el proceso, cuando la ley les asigna uno determinado de carácter obligatorio, o alteran el orden de precedencia que la ley les diere. Asimismo, se ha resuelto que ellas constituyen normas básicas de juzgamiento, que contienen deberes, limitaciones o prohibiciones a que deben sujetarse los sentenciadores. Luego los jueces del fondo son soberanos para apreciar las probanzas, dentro del marco establecido por las normas pertinentes.

**Décimo:** Que, en el presente caso, los reproches formulados se relacionan con una cuestión diversa a la expuesta en el considerando anterior, puesto que únicamente se ha criticado la forma cómo los jueces del fondo analizaron la prueba documental rendida en el proceso por el reclamante. En efecto, el recurso de casación en estudio se erige sobre la base de haber incurrido los sentenciadores en infracción a las normas reguladoras de la prueba, puesto que han valorado e interpretado equívocamente la numerosa prueba documental acompañada en autos por los actores, especialmente los Oficios Ordinarios N°s 10.198, 10.200, 10.201 y 10.207 de la SVS emitidos con fecha 20 de abril de 2012, de cuya correcta valoración se habría asentado que la autoridad fiscalizadora incurrió en las incongruencias denunciadas



en el recurso, al calificar las operaciones cuestionadas en dichos oficios como operaciones inexistentes, para luego, y sin fundamento alguno, calificarlas en la resolución reclamada como operaciones entre empresas relacionadas, faltando, además, al deber de motivación. Similar yerro se denuncia respecto de las facturas N° 4676394 y 4676395 emitidas el 29 de marzo de 2011 por Banchile Corredores de Bolsa S.A., de las que se desprenderían las gruesas diferencias entre las transacciones realizadas por las empresas auditadas en marzo de 2011 con las de diciembre de 2010.

De lo expuesto resulta evidente que lo que realmente impugna la recurrente es la apreciación de la prueba rendida en autos, aspecto que corresponde a una facultad privativa de los jueces del grado y, en consecuencia, no susceptible de ser revisada a través del recurso de casación en el fondo.

**Décimo primero:** Que, sin perjuicio que lo anterior es suficiente para desestimar este capítulo de casación, se debe señalar también que, del tenor de la sentencia recurrida, resulta palmario que los sentenciadores del grado no han incurrido en yerros de derecho respecto de las normas reguladoras de la prueba, puesto que no fue controvertido por las partes las operaciones realizadas por las empresas auditadas y su desarrollo, entre ellos, la circunstancia que la SVS, a través de los aludidos





Oficios, instruyó, respectivamente, a Pampa Calichera, Norte Grande, Oro Blanco y Potasios, efectuar ajustes a los estados financieros, trimestrales y anuales, del año 2011, con el objeto de revertir el efecto contable de las transacciones efectuadas el día 29 de marzo de 2011, a las que se les dio un tratamiento que implicó una revalorización de parte de sus inversiones accionarias en SQM-A. En ellos se señaló, además, que "las citadas operaciones de venta y compra correspondieron, en la práctica, a transacciones entre entidades relacionadas y, que por aplicación de la 'esencia sobre la forma' necesaria para que la información financiera cumpla con la característica cualitativa de ser fiable, según el Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera(IFRS), ellas no conllevaron la enajenación de dichas acciones fuera del grupo relacionado a Pampa Calichera, porque las mismas -desde el primer día de la venta inicial 29 de marzo de 2011 por Global Mining- han seguido en poder del grupo ...". La autoridad, entonces, ha tenido por establecida la realización de las operaciones que implicaron el traspaso de las acciones entre las sociedades auditadas, las que fueron debidamente registradas en sus respectivas partidas contables. Lo anterior es indiscutido por la reclamante y la reclamada. Tema distinto es que la SVS, mediante presunciones, llegó a la convicción que no



obstante la constancia documental de tales operaciones, en la realidad de los hechos ellas son inexistentes, pues las calificó jurídicamente como simuladas y, por lo mismo, que no reflejan la voluntad real de transar libremente las acciones en el mercado, sino que solamente entre las sociedades relacionadas, por lo cual, reprocha una inexistencia ideológica y no material.

De otra parte, tampoco fue un hecho controvertido durante el juicio las diferencias existentes entre la forma en que se habrían realizado las operaciones del 29 de marzo, de aquellas efectuadas el 20 de octubre de 2011, según fue asentado en el considerando décimo cuarto de la sentencia recurrida, de manera que no resulta ajustado al mérito del proceso lo sostenido en el recurso en lo que respecta a este punto, de manera que, además de no configurarse los yerros denunciados, éstos no han tenido trascendencia alguna en lo resolutivo del fallo.

**Décimo segundo:** Que, de la forma como se ha reflexionado en los motivos precedentes, cabe concluir que no ha existido en el caso sub-judice vulneración a las leyes reguladoras de la prueba, razón por la cual los presupuestos fácticos que han sido establecidos por los jueces del fondo con sujeción al mérito de los antecedentes, probanzas aportadas por las partes, interpretación y aplicación de normas atinentes al caso en estudio, resultan inamovibles, no siendo posible



impugnarlos por la vía de la nulidad que se revisa, por lo que ha de estarse a ellos para su definición y decisión consiguiente, esto es, el análisis de los demás yerros denunciados.

**Décimo tercero:** Que, en consecuencia, los hechos sobre los que se examinará las restantes infracciones de derecho que se han denunciado en el presente arbitrio, son los dados por establecido por los jueces del fondo y aludidos en el motivo primero de esta sentencia, que en síntesis corresponden a los siguientes:

1. El 29 de marzo de 2011, Global Mining Chile Limitada, filial de Pampa Calichera, vendió entre las 9:33 horas y las 11:40 horas, 5.000.000 de acciones de SQM-A a Linzor Total Return Fund, a \$ 27.100 cada una.

2.- Ese mismo día, Linzor vendió a Oro Blanco, entre las 9:36 horas y las 11:43 horas, 5.000.000 de acciones SQM-A a un precio de \$27.138,5 cada una, todo ello en la Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.

3.- Los fondos obtenidos por Global Mining fueron prestados a Pampa Calichera, la que a su vez los prestó a Oro Blanco, a través de las respectivas cuentas relacionadas, para que esta última realizara la operación de compra, registrando lo ocurrido en las respectivas Actas de Directorios celebrado al efecto.

4.- El 20 de octubre de 2011, Potasios compró 5.000.000 de acciones SQM-A a Oro Blanco, la cual pagó



principalmente mediante compensación del crédito que tenía con Oro Blanco, que le había sido asignado en la división de Pampa Calichera, saldando así Oro Blanco la deuda que inicialmente tuvo con Pampa Calichera y, luego la división de ésta última con Potasios.

5. PWC como auditora externa y el señor Gatica, como socio a cargo de la auditoría, suscribió el informe interino y de auditoría sin salvedades, respecto de los estados financieros al 30 de junio y 31 de diciembre de 2011, de Pampa Calichera, Oro Blanco, Norte Grande y Potasios, en los que se registró las operaciones de marzo de 2011, descrita en el numero 1 precedente, asignándole el tratamiento contable de una operación realizada con terceros no relacionados. En tanto que respecto de las operaciones de octubre de 2011, descrita en el numeral que antecede, la auditora validó el movimiento patrimonial de Potasios al 31 de diciembre de ese año, lo que consistió en el reproceso aritmético y lecturas de Actas de Sesión de Directorio.

**Décimo Cuarto:** Que, continuando con el examen de los yerros denunciados, en cuanto a aquél que se relacionan con la extemporaneidad de sanción impuesta, y subsecuente el decaimiento del proceso administrativo, es preciso recordar las normas atinentes de la Ley N° 19.880.

El artículo 27 del cuerpo normativo en examen, dispone: "Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el



procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”.

Por su parte, el artículo 28 de la misma ley, previene: “Inicio. Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada”.

Finalmente, el artículo 29 señala: “Inicio de oficio. Los procedimientos se iniciarán de oficio por propia iniciativa, como consecuencia de una orden superior, a petición de otros órganos o por denuncia.

Con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento”.

**Décimo Quinto:** Que, del tenor de las disposiciones transcritas, indudable resulta concluir que el proceso administrativo no puede exceder de seis meses desde su inicio, ya sea de oficio o a petición de parte. Luego, la apertura del procedimiento en los términos antes anotados, no obsta a la facultad que detenta la autoridad competente para abrir un período de información previa, con el objeto de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento, conforme lo dispone el transcrito artículo 29 de la Ley N° 19.880, como ocurrió en el presente caso,



información de información previa que resultaba indispensable, atendida la complejidad de las operaciones de que se trata.

De lo concluido precedentemente, se desprende que los jueces recurridos están en lo correcto al haber desestimado la excepción de extemporaneidad de la sanción alegada por los actores y el decaimiento del procedimiento administrativo seguido en su contra, desde que los actos que la SVS realizó a partir del 26 de marzo de 2012, cuando se requiere a la Auditora todos los papeles de trabajo o cualquier otro antecedente relacionado con la auditoría practicada a los estados financieros al 31 de diciembre de 2011, referentes a las sociedades del Grupo Cascada, corresponden a actuaciones propias de la etapa de informaciones previas a las que se refiere el transcrito artículo 29, requeridos con el propósito de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar un procedimiento sancionatorio.

Luego, sólo a partir del Oficio Reservado N° 1534 de 16 de diciembre de 2014, por los que la SVS formuló cargos a los reclamantes, los que fueron reformulados mediante Oficio Reservado N° 069 de 23 de enero de 2015, se dio inicio al procedimiento sancionatorio en contra de los actores, el que culminó con la Resolución Exenta N° 223 de fecha 20 de julio de 2015 objeto del presente



reclamo, por lo que no se ha incurrido en las infracciones denunciadas a los artículos 27 y 29 de la Ley N° 19.880, como tampoco a los artículos 4, 7, 8, 10 y 16 del mismo cuerpo normativo, desde que no transcurrió más de seis meses desde el inicio del procedimiento hasta la fecha en que se emitió la decisión final.

**Décimo sexto:** Que refuerza la conclusión anterior, la circunstancia que, si bien a la Administración le vinculan los plazos y en especial el término máximo de respuesta, el que la ley establece para el procedimiento propiamente tal en seis meses como se señaló, la sola demora injustificada del mismo da origen a responsabilidad, sin perjuicio de aplicar positiva o negativamente el silencio como causal de término del procedimiento, y no necesariamente conlleva el término o extinción del procedimiento, pues para ello se requiere que la superación irracional e injustificada del referido plazo derive en la imposibilidad material para continuar el procedimiento, al concurrir una causal sobreviniente consistente en, precisamente, la expiración del plazo legal, unido a la superación de todo límite de razonabilidad, situación que de estimarse concurrente, contraría diversos principios del derecho administrativo obligatorios para la Administración, directrices que, además, tienen expresa consagración legislativa, a los que el reclamante ha denunciado como infringido en este



acápites de su arbitrio, todos los que no se apreciaban vulnerados en la especie, desde que el procedimiento sancionatorio que culminó con el acto administrativo reclamado, no se extendió por sobre los términos que mandatan la razonabilidad y el debido proceso, sin que, además, se haya observado una conculcación a las garantías procesales de los actores, a quienes le fue otorgado un nuevo periodo para presentar sus descargos, frente a la reformulación de los mismos, resultando la decisión final oportuna frente a los hechos que la motivan.

**Décimo Séptimo:** Que, en cuanto al yerro denunciado, consistente en la errónea aplicación del inciso tercero del artículo 13 y artículo 56 de la Ley N° 19.880, e infracciones a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, por resultar ilegal la reformulación de cargos, es preciso recordar que el proceso administrativo sancionatorio que culminó con la Resolución N° 223 de 20 de julio de 2015, se funda en las instrucciones que fueron comunicadas por la SVS a las Sociedades Cascada en abril del año 2012, lo que generó la fiscalización respecto del informe interino y de auditoría sin salvedades emitido por la sociedad Auditora -bajo la responsabilidad del Sr. Gatica-, respecto de los estados financieros al 30 de junio y 31 de diciembre de





2011, de Pampa Calichera, Oro Blanco, Norte Grande y Potasios.

En tal labor, la SVS habría pesquisado una serie de falencias en el trabajo e informe de auditoría antes referido, las que estimó eventualmente sancionables por vislumbrarse contravenciones a las NAGAs, resolviendo formular cargos mediante el Oficio Reservado N° 1534 de 16 de diciembre de 2014, acto a partir del cual se dio inicio al correspondiente proceso administrativo sancionatorio, como se ha señalado.

Sin perjuicio de ello, y tras los descargos formulados por los reclamantes, estimando que en aquel oficio se había incurrido en una referencia no precisa al hacer alusión al "principio de la esencia sobre la forma", la SVS resolvió dictar el Oficio Reservado N° 69 de 23 de enero de 2015, a través del cual se reformulan los cargos en orden a reemplazar aquella referencia por el principio de "Representación Fiel" del "Marco Conceptual para la Información Financiera", manteniendo la formulación de cargos primigenia en todo lo demás y otorgando un nuevo término a los reclamantes de hacer descargos, ampliar, modificar y complementar los ya realizados, lo cual fue efectuado por los actores.

**Décimo Octavo:** Que para el estudio de los desaciertos jurídicos, este acápite del arbitrio de casación en el fondo reposa en una preceptiva ya



analizada, donde se concluyó la inexistencia de quebrantos al debido proceso, pues el órgano fiscalizador actuó dentro de sus atribuciones y otorgó a la reclamante la oportunidad de practicar todas las actuaciones y rendir todas las probanzas ofrecidas en apoyo de su pretensión, motivo bastante para dejar sin asidero esta sección del libelo.

En efecto, tal y como fue resuelto por los jueces recurridos, la corrección de oficio de los cargos formulados en virtud de una referencia normativa no vigente a la época de los hechos investigados, se encuentra dentro de las facultades previstas en el artículo 56 de la Ley N° 19.880 a la autoridad a cargo del procedimiento sancionatorio y a la sencillez y eficacia con que el mismo debe ser substanciado, evitando posibles perjuicios a los investigados ante imprecisiones que puedan acarrear confusión a su defensa, como ha ocurrido en la especie, sin que sea óbice para ello, la circunstancia que los propios investigados hayan advertido la imprecisión normativa en su escrito de descargo, actuación que permitió a la propia autoridad a cargo del procedimiento, siempre dentro del término legal para substanciar el procedimiento, pudiera enmendar oportunamente cualquier inconsistencia o imprecisión en la formulación de cargos, confiriendo un nuevo plazo a los investigados para presentar nuevos descargos,



ampliar, modificar y complementar los ya realizados, asegurando con ello sus garantías procesales de los actores y, principalmente, el pleno ejercicio de su derecho a defensa.

**Décimo Noveno:** Que, respecto a la infracción denunciada al artículo 35 de la Ley N° 19.880 por haber desestimado los punto de prueba solicitados por el reclamante y medios de prueba durante el procedimiento administrativo, baste señalar que no fue un hecho controvertido la formas de cómo se ejecutaron las operaciones bursátiles del Grupo Cascadas auditadas por los actores y la circunstancia que éstas se ajustaron formalmente a la legalidad vigente, de manera que no resultaba necesario introducir este hecho dentro de aquellos fijados por la autoridad a cargo de su substanciación, por resultar innecesario a la luz de lo expuesto por las partes en sus presentaciones principales durante la etapa de instrucción del procedimiento sancionatorio. Por el contrario, la controversia planteada se funda precisamente en determinar si la empresa auditora tenía la obligación de levantar toda información sobre los antecedentes que rodearon las operaciones de marzo y octubre de 2011, más allá de haber constatado que cumplían con las formalidades legales, para así determinar si efectivamente, y en la esencia,



debió representarse que se estaba en presencia de operaciones entre partes relacionadas.

**Vigésimo:** Que, finalmente, en cuanto a la infracción denunciada al artículo 28 del D.L. N° 3.538 en relación con los artículos 239, 246 y 248 de la Ley N° 18.045, las mismas no se han configurado en la especie, desde que los sentenciadores de fondo se ajustaron al mérito del proceso, a los hechos acreditados y a la correcta interpretación y aplicación de las normas antes referidas.

En efecto, se debe recordar que la principal defensa de los reclamantes durante el procedimiento sancionatorio se hizo consistir en que las operaciones celebradas en marzo de 2011 se estimó como realizadas entre partes independientes, únicamente por haber sido realizadas en la Bolsa Electrónica de Chile. Sin embargo, tal y como fue consignado en la resolución reclamada, hecho que no fue desvirtuado por los actores, éstos estuvieron de acuerdo con el tratamiento dado por la empresa auditoria externa de las Sociedades Cascadas que la antecedió, Ernest & Young, respecto a las operaciones realizadas en diciembre de 2010 con el título SQM-A por Pampa Calichera y Oro Blanco, y replicadas en enero de 2011, esto es, en el periodo bajo revisión de PwC, cuyas utilidades fueron consideradas como provenientes de operaciones entre partes relacionadas, sin que se haya logrado explicar el



cambio de criterio de los actores, a pesar que en ambos casos se trata de operaciones ejecutadas en bolsa para un título que tenía presencia bursátil, contradicción que fue advertida por la SVS, quien además observó que en los papeles de trabajo de la auditora no consta alguna evidencia que diera cuenta que asumió como hipótesis que dichas operaciones podrían corresponder a operaciones entre partes relacionadas, a pesar que en los descargos los actores sostuvieron que no resultaba clara la aplicación de la NIC 24 referida a la información a revelar sobre partes vinculadas.

De la misma forma, se acreditó durante el procedimiento sancionatorio que los actores obviaron una serie de antecedentes que debieron haber considerado, nada de lo cual consta en los papeles de trabajo, como es que la venta y la compra fue efectuada el mismo día, por el mismo volumen de acciones, a través de la misma corredora de bolsa, que generaron resultados materiales en los Estados Financieros en las sociedades implicadas, que Pampa Calichera y Oro Blanco tenían en mismo Gerente General, que las acciones SQM-A permite elegir 6 de los 7 directores por lo que tienen un rol preponderante para mantener el control de SQM, que los flujos que se generaron en la venta de los títulos SQM-A financiaron la transacción de compra de Oro Blanco, mediante un préstamo desde Global Mining a Pampa Calichera y finalmente a Oro



Blanco, y que en diciembre de 2010 y enero de 2011 se realizaron transacciones con las mismas sociedades, habiendo la auditora externa anterior -E&Y- objetado el tratamiento contable dado a la operación de diciembre del año 2010.

Con ese cúmulo de antecedentes, la reclamante debió analizar la esencia de las operaciones, representándose al menos la posibilidad de que se estaba en presencia de una operación entre empresas relacionadas y, en su caso, descartarla fundadamente sobre la base de consideraciones técnicas, nada de lo cual realizó. Es durante el proceso sancionatorio que se limita a sostener que las operaciones se habían realizado entre partes independientes por haberse ejecutado en la bolsa, contradiciendo con ello el criterio de la empresa Auditora externa a cargo del grupo hasta el año 2010 y su propio proceder respecto de las operaciones celebradas en enero de 2011.

La posición asumida ahora por la reclamante contradice su propia prueba testimonial, consistente en la declaración de don Domingo Mario Marchese, para quien una operación realizada en bolsa no implica necesariamente que sea una operación entre partes independientes, profesional que propone realizar una serie de pruebas que deberían haber sido efectuadas por la auditora para levantar la información y determinar si



efectivamente, en la esencia, se podría estar observando una operación entre partes relacionadas, nada de lo cual realizaron las reclamantes.

En definitiva, el reproche implícito al proceder de los actores que conllevó la imposición de las multas reclamadas, se sustenta en que la auditora, a instancia del Sr. Gatica, no efectuó un análisis en cuanto a si las operaciones de marzo y octubre de 2011 entre las Sociedades Cascadas podían ser entendidas como transacciones entre partes relacionadas o, en su defecto, por qué no se dio dicho carácter en las actas de sesiones de directorios a las que tuvo acceso, para a partir de ello, les permitiera evaluar si el criterio establecido por el directorio de cada sociedad del grupo, estaba acorde a la IFRS.

**Vigésimo Primero:** Que, por consiguiente, los yerros denunciados no han podido cometerse, pues correctamente los sentenciadores recurridos estimaron que los actores no cumplieron debidamente sus funciones con razonable cuidado y diligencia en su labor de auditoría, al no haber actuado de manera crítica e inquisitiva, al examinar, evaluar, interpretar y determinar los resultados que le fueran presentados para emitir su informe de revisión de información intermedia y opinión final de los estados financieros de las Sociedades Cascadas.



Para alcanzar esta conclusión, la SVS sólo analizó las tareas desarrolladas por la auditora a instancia del Sr. Gatica durante el año 2011 respecto a las sociedades del Grupo Cascadas, no resultando efectivo lo alegado en el arbitrio en examen en cuanto a que se consideró otros antecedentes a los que no tuvo acceso o se incurrió en sesgo retrospectivo, pues del examen de los papeles de trabajo de la propia auditora, a través de su socio Sr. Gatica, se comprobó que no efectuó un examen crítico de los antecedentes que requería la esencial labor realizada, en los términos expresados en los considerandos precedentes.

Tampoco resulta efectivo que se esté en presencia a meras discrepancias en la interpretación técnica de las normas, pues los jueces del fondo, en el considerando décimo sexto de la sentencia recurrida, correctamente asentaron que la controversia radica en el nivel de diligencia y debido cuidado que les era exigible a los actores en la auditoría practicada, al no plantearse ni siquiera como hipótesis de trabajo, que se podría tratar de operaciones entre empresas relacionadas, partiendo sin justificación suficiente de la premisa que la operación se realizó entre sujetos independientes por haberse ejecutado en bolsa, en circunstancia que, para los mismos actores, la norma técnica no resultaba clara en el caso como el analizado, según lo expusieron en sus descargos,





omisión que configura el reproche sancionado, pues de no haberse incurrido en él, con independencia de la conclusión profesional a la que se llegara, esto es, si se trataba de operaciones entre empresas relacionadas o no, necesariamente requería que la auditora externa analizara la esencia de la operación y las circunstancias que la rodearon. Una auditoría eficiente, en caso de duda, al tener como misión destacar los riesgos, deja constancia de este hecho y de su parecer, con el objeto de informar debidamente a quienes le encomendaron el trabajo y al público en general. Esta constancia era lo mínimo que debía consignarse, sobre todo, como se ha dicho ya en reiteradas oportunidades, que la auditora que le antecedió en el examen de los estados financieros intermedios y finales, sí dejó establecida la circunstancia ante hechos similares, por la importancia de la operación, las consecuencias en el control de las sociedades, sin que sea suficiente que se transaran las acciones en la Bolsa de Comercio, puesto que las consecuencias indicadas igualmente se presentan en el caso.

De la misma forma se deben descartar las contradicciones en la sentencia recurrida como se denuncian en el recurso, o que sólo se trate de discrepancias de interpretación técnica de las normas que deben seguir los auditores, como tampoco que se le esté



sancionando por no estar de acuerdo en la posición asumida por la SVS en relación a las operaciones objeto de la resolución reclamada. Ello por cuanto la sanción impuesta está motivada en el hecho objetivo de haber faltado a sus deberes de diligencia connatural a la esencial labor que realizan en su calidad de empresa auditora externa.

Todo lo anterior ha sido asentado como presupuestos fácticos correctamente demostrados por el demandado en su actividad probatoria.

**Vigésimo Segundo:** Que, tampoco se configura la pretendida infracción de la doctrina de los actos propios y al principio de confianza legítima fundada en la supuesta incongruencia observada por los reclamantes en los actos intermedios dispuestos por la SVS, consistente en haber remitido Oficios Ordinarios en abril de 2012 solicitando revertir la totalidad de los efectos financiero-contable de las transacciones a todas las sociedades, dándole tratamiento de operaciones simuladas o inexistentes, para luego, en la formulación de cargos y en la resolución reclamada, señalar que se trata de operaciones entre partes relacionadas.

En efecto, no resulta trascendente para el examen de legalidad que se realiza respecto de la Resolución exenta reclamada, la circunstancia que durante el período de información previa dispuesto por la SVS con el fin de



conocer las circunstancias del caso y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento, haya entregado instrucciones a las Sociedades involucradas, pues lo relevante para el resguardo del principio de juridicidad y el pleno respeto de las garantías que le asisten al reclamante, es que los cargos se fundaron en que PwC, a instancia del Sr. Gatica, no analizó el trasfondo económico de las transacciones, en un examen y revisión de la labor que como auditor externo correspondía, ante operaciones que no implicaron la enajenación efectiva de acciones fuera del grupo Cascada, obedeciendo a operaciones entre partes relacionadas, como fue asentado en el considerando décimo tercero de la sentencia recurrida. Se agrega a lo anterior que este hecho no tiene un efecto o connotación diferente, por el solo antecedente de ser realizado en la Bolsa de Comercio en una oferta de las acciones abierta al público. En efecto, de igual modo debió consignarse este hecho en el informe de auditoría externa, puesto que, como ya se ha expresado, sus consecuencias eran muy relevantes en los estados financieros, tanto por el importe del capital y el control que otorgaba la compra de las acciones.

**Vigésimo Tercero:** Que, finalmente, resulta útil consignar que, de compartirse la limitada interpretación que proponen los recurrentes en cuanto a la labor de las auditorías externas, importaría desconocer que éstas



forman parte fundamental del proceso de información al mercado, incidiendo su labor en el proceso de formación del capital, radicando su función en la emisión de su opinión profesional e independiente, dictamen que importa revisar de manera exhaustiva y con la mayor rigurosidad las operaciones se encuentran reflejadas y expresar. El juicio de la auditora se extiende a determinar si éstas se encuentran expresadas razonablemente, velando para que los estados financieros se preparen de acuerdo a los principios y normas generalmente aceptadas, como a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (hoy Comisión para el Mercado Financiero). Es por ello, como correctamente fue descrito en el considerando décimo séptimo de la sentencia recurrida, se les exige actuar con el máximo de diligencia, debiendo responder de acuerdo con el artículo 53 inciso tercero de la Ley N° 18.046 de culpa leve por los perjuicios que causaren.

En ese contexto, la información de que disponían en relación a la naturaleza de sus funciones y la responsabilidad que ésta lleva consigo, imponía revisar la evidencia con espíritu crítico y, ante la concurrencia de variados antecedentes que alertaban sobre la situación, examinarlas a fondo, inspección que no se cumplió en concepto de los jueces del fondo y que asentaron como hecho de la causa. En efecto, los



antecedentes le fueron proporcionados y tuvo a la vista las conclusiones de la auditoría anterior en que se develaron situaciones que merecieron los reparos pertinentes, no obstante lo cual no se destacaron, como tampoco se cuestionaron las operaciones ni su resultado, sino que la falta de exhaustividad en su dictamen se reflejó en el informe emitido, con lo cual se incumplieron las normas que le imponían un proceder diligente, prudente, profesional y observador de todas las disposiciones legales, reglamentarias y de buenas prácticas reflejadas en las NAGAS.

En efecto, lo razonado deja expuesto lo fundamental del recurso y los motivos que justifican su rechazo, circunstancia que acontece por el hecho que se objeta la apreciación técnica de SVS, puesto que en concepto del ente fiscalizador la recurrente debió ser más exhaustiva, prolija, profunda en su análisis y con mayores hipótesis de trabajo en la auditoría externa practicada por la empresa PwC y en especial la labor desarrollada por su socio a cargo Javier Gatica Menke, por cuanto no solamente correspondía revisar los asientos contables y que estos correspondieran regularmente a las operaciones efectivamente efectuadas por las empresas auditadas, sino que, reiterando una vez más lo dicho, procedía incorporar un análisis mayor sobre el capital accionario, titularidad de las acciones, precisión de los



controladores, efectos y consecuencias de las operaciones en tales aspectos, como, además, poner en perspectiva todas las transacciones, incorporando en esa labor los conocimientos y buenas prácticas aceptadas nacional e internacionalmente que se reflejan en las NAGAS e IFRS, antecedentes de su especialidad que no ha podido ignorar como consultor medio y, con mayor razón, si afirma posee amplia competencia y experiencia en el área.

De esta forma lo entendió la Corte de Apelaciones recurrida, conclusión que esta Corte considera acertada y comparte.

**Vigésimo Cuarto:** Que, en el cuarto conjunto de errores de derecho desarrollado por el recurso, se plantea que el reproche realizado en la sentencia, en cuanto a que no habría “analizado el trasfondo económico de las transacciones efectuadas”, puesto que, ante operaciones que no implicaron la enajenación efectiva de acciones fuera del grupo Cascada, se las asimilaron tanto por la SVS, como por los jueces del fondo, a operaciones simuladas.

Destaca, para los efectos de la configuración de la infracción de ley, que no se está discutiendo en el recurso de casación si la sentencia recurrida infringe las NAGAS y demás normas técnicas aplicables a la labor de auditoría, sino que se reprocha a la sentencia el haber confirmado una sanción, pero prescindiendo



expresamente de la necesidad de que se haya verificado un actuar contrario a tal normativa técnica para poder determinar la responsabilidad administrativa de los reclamantes. Por consiguiente, reitera el recurrente, que desligarse de la discusión técnica y evaluación para concluir una falta de diligencia o cuidado por la supuesta ausencia de prueba como pretende la sentencia, supone, en definitiva, infringir las disposiciones legales antes citadas que son las que fijan precisamente las obligaciones de los auditores. Luego, mediante ejemplos, llega a la conclusión que existen transacciones que podría encuadrarse en una compraventa de acciones que no otorgan al inversionista el control, sino influencia significativa, como es el caso de las empresas auditadas que motivaron la sanción reclamada, cuales son compraventa entre partes independientes, compraventa entre partes relacionadas y compraventa simulada o ficticia, explicando su tratamiento conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las cuales no han sido transgredidas.

**Vigésimo Quinto:** Que, en los términos planteados por el recurso, el reproche es de omisión de consideraciones y falta de demostración de la infracción de las normas técnicas, producto de lo cual se incurre en la transgresión de las normas legales que señala.



Teniendo en consideración que la denuncia se sustenta en el hecho de falta de consideraciones y de fundamentación en normas que no constituyen disposiciones legales, permitiría descartar la procedencia del recurso de casación en el fondo, sin embargo, por razones derivadas de la correcta interpretación y de orientación jurisprudencial esta Corte procederá a pronunciarse sobre el punto.

En efecto, la legislación chilena e instrucciones impartidas por la autoridad fiscalizadora competente exige a todas las sociedades anónimas que hacen oferta pública de valores, a las sociedades anónimas especiales, y a otras personas, organizaciones e, incluso actualmente a servicios públicos, la obligación de someter sus estados financieros a una auditoría externa. Igualmente, a partir del año 2000 los estados financieros semestrales son sometidos a revisión limitada, por parte de los mismos auditores externos designados en Junta de Accionistas de la sociedad respectiva. Procedimiento de auditoría externa que está establecido para las sociedades anónimas abiertas en el artículo 52 Ley de Sociedades Anónimas, como en el artículo 129 para las sociedades anónimas especiales.

Son diversos los motivos por los cuales se hace necesaria una auditoría y que ésta la realicen auditores externos respecto de sociedades ya inscritas. En la misma





normativa se exige, además, un informe de revisión financiera interina realizada por auditores externos.

Otro aspecto a considerar es la "opinión" que están obligados a manifestar tales auditores. En la práctica contable se afirma que lo que se denomina Informe sobre los estados financieros intermedios "no constituye una opinión", en tanto el alcance que tiene es sustancialmente menor, en relación con una auditoría externa efectuada de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas en Chile (NAGAS), cuyo objetivo es, precisamente, emitir una opinión sobre los estados financieros de las sociedades auditadas.

Es así como en el artículo 246 de la Ley sobre Mercado de Valores, se alude a las NAGAs. En ellas se lee que la auditoría es la revisión y verificación de la exactitud de documentos contables, con la finalidad de emitir un informe de auditoría. El objetivo de esa revisión por parte del auditor, como se ha dicho, es expresar una opinión sobre la racionalidad con que los documentos contables o estados financieros representan en todos los aspectos significativos la situación financiera, los resultados de operaciones y el flujo efectivo de los negocios de una sociedad, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, por cuanto, en la literatura contable, la auditoría externa es un examen hecho por contadores auditores sobre los



estados financieros y valores relativos, que culmina con una opinión de si estos estados financieros están o no de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados. Tales normas requieren que se planifique y realice el trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad, dando garantía que los estados financieros consolidados estén exentos de representaciones incorrectas significativas.

En este contexto, se ha expresado que "la función básica del auditor externo es expresar su opinión profesional e independiente sobre los estados financieros, y el cumplimiento de dicha función implica, entre otras materias, la obligación de examinar con el máximo de diligencia, si las distintas operaciones están reflejadas razonablemente en los estados financieros; señalar a la administración de la sociedad cualquier deficiencia que detecten, tanto si ellas son prácticas contables o de control interno; velar para que los estados financieros se preparen de acuerdo a los principios y normas generalmente aceptadas y a las instrucciones dictadas por la SVS, y también revelar posibles fraudes o irregularidades que puedan afectar la presentación justa de la posición financiera o de los resultados. Para cumplir su cometido, las empresas auditoras tienen, entre otras, la facultad de examinar todos los libros, registros, documentos y antecedentes de



la sociedad y de sus filiales" (Bahamondez Prieto, Felipe. Pricewaterhouse: Responsabilidad de las Empresas Auditoras Externas por sus labores profesionales. En Sentencias Destacadas 2006, Ediciones Libertad y Desarrollo, Santiago, 2007, pp. 22 - 23).

Tomando por base tales presupuestos como la responsabilidad que la ley se encarga de precisar para los auditores externos, se debe coincidir que tales profesionales desempeñan una función que tiene un doble destinatario: la sociedad que le contrató, pero igualmente el público en general y los interesados que puedan acceder a sus conclusiones con la finalidad de efectuar decisiones de inversión. Es por tal antecedente y tomando como referencia la realidad estadounidense, que se ha planteado correctamente que los auditores externos son "guardianes del mercado de valores" o "gatekeepers" (Méndez, 2008, pp. 119 -154). En sentido semejante, para Gómez Balmaceda el objeto fundamental de la auditoría entonces sería garantizar que la contabilidad presentada refleje con toda claridad la imagen fiel de la situación del patrimonio y el efectivo resultado del negocio. En el desempeño de su actividad, los auditores cautelarian los intereses de la sociedad, de accionistas y de terceros que confían en su gestión profesional, y su estándar de cuidado sería el de máxima diligencia (Gómez Balmaceda, 2009, pp. 741-758). Schopf postula que la obligación



principal del auditor sería revisar y verificar los estados financieros de la empresa que audita, y preparar un informe de auditoría, emitiendo su opinión profesional. La finalidad del informe consistiría en "declarar si los estados financieros se encuentran o no correctamente presentados". En el tratado de sociedades anónimas, el profesor Puga plantea que la auditoría "en verdad" consiste en una verificación de que la contabilidad es llevada regularmente conforme a los principios contables y las normas contables generalmente aceptadas. Estima que los auditores tienen autonomía en tres aspectos diferentes: a) para recabar antecedentes; b) para formular las bases en que asientan sus opiniones, y c) para emitir sus conclusiones. El mismo autor critica a los auditores "pasivos". Cree que debiese ahondarse más en el hecho de que los auditores deben ser tratados como una institución de fiscalización de la administración para los accionistas y el público en general, y que los artículos 51 y 52 Ley de Sociedades Anónimas permiten considerarlos mandatarios de los accionistas (Puga, 2013, pp. 537 y 531, respectivamente).

Como se ha indicado, en cuanto proceso, la auditoría consiste en la comprobación de estar los registros contables conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados. El artículo 73 LSA dispone, entre otras cosas, que los asientos contables de la sociedad



deben llevarse de conformidad con los principios de contabilidad de aceptación general. Estos principios, conforme a la NCG N° 30, son los formulados en los Boletines Técnicos (BT) del Colegio de Contadores de Chile, A.G., siempre que no se contradigan con normas dictadas por ella misma.

Los PCGA fueron desde el año 1971 hasta el año 2009, aproximadamente, la adaptación chilena del modelo norteamericano de reglas contables (los United States Generally Accepted Accounting Principles, conocidos por el acrónimo US GAAP) que el Colegio de Contadores de Chile desarrolló en tanto organismo de derecho privado facultado por ley para dictar normas contables de carácter obligatorio. Los PCGA se desarrollaron desde el año 1971 con la creación de una comisión al interior del Colegio denominada "Comisión de Principios y Normas Contables". De esta Comisión fueron emanando los principios a través de Boletines Técnicos. El Boletín Técnico N° 56 del año 1997 organizó sistemáticamente los boletines técnicos anteriores. La inspiración de estos criterios en el modelo norteamericano obedeció a que la mayor parte de las operaciones de empresas chilenas se desarrollaron en términos de inversión extranjera y financiamiento por la vía de la emisión de ADR (American Depositary Receipts) (Canales, 2002, p. 41).



Este modelo cambió en el año 2009. A partir de ese ejercicio en adelante, todas las sociedades anónimas sujetas a fiscalización oficial, en virtud de diversas normas administrativas, fueron obligadas a confeccionar sus estados financieros trimestrales y anuales en conformidad a International Financial Reporting Standards (IFRS) o "Normas Internacionales de Información Financiera" (NIIF). Estas normas representan, en lo concreto, los estándares y reglas contables conforme a las que se están representando los estados financieros en las principales economías del mundo, producto de acuerdos de convergencia en tal sentido, que se intensificaron y masificaron en los últimos diez años. En consecuencia, desde que se convirtió en obligatoria la utilización de los IFRS, la remisión de la ley de sociedades anónimas a los PCGA se entiende hecha a los IFRS, las que, incluso en algunos textos oficiales, se denominan "nuevos principios de contabilidad generalmente aceptados".

De lo dicho anteriormente, se desprende que la normativa de valores en Chile les ha asignado una función de la mayor importancia, exigiéndose a los auditores externos de una sociedad cotizada o de cualquier entidad fiscalizada por la SVS, el deber de estar inscritos en el Registro de Auditores que lleva la misma SVS, hoy CMF. Para efectos de dicha inscripción se les exige, entre otras, idoneidad técnica y moral que se refleja en su



capacidad técnica y comportamiento irreprochable para desempeñar estas funciones.

Debido a las importantes funciones que cumplen los auditores externos, el Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas ha indicado, entre otras responsabilidades, que estos deben emitir sus informes cumpliendo con las normas de auditoría de aceptación general y, en el caso de las sociedades abiertas, cumpliendo con las instrucciones o normas de la SVS; y, utilizar técnicas y procedimientos de auditoría que garanticen que el examen sea confiable y adecuado, proporcionando elementos de juicio válidos y suficientes para sustentar su opinión. El recurso a los antecedentes históricos de la auditoría externa permite conectarla con su sentido, que no es otro que la fiscalización privada o control externo de la administración de la entidad auditada.

Además, en la tarea encomendada regularmente a un consultor no solo se encuentra el hecho de vigilar la correcta ejecución contable de las operaciones mercantiles de una sociedad, conforme a las disposiciones y buenas prácticas nacionales incorporadas en las NAGAS, como las internacionales reflejadas en las IFRS o NIC, se requiere que efectivamente se profundice el análisis, atendiendo a las circunstancias de la especie, no solamente con una ponderación abstracta de regularidad, pues a toda auditoría externa le corresponde pronunciarse



en torno a los aspectos concretos del ejercicio financiero de la sociedad, en su conducta corporativa de inversiones, con mayor razón si tienen repercusión en el aumento de capital y la compra de paquetes accionarios de empresas que están o pueden llegar a estar relacionadas por tales operaciones, sus conexiones, efectos, repercusiones u otras consecuencias en el capital entre tales empresas, conocidas que fueron aquellas indicadas en los motivos primero y décimo tercero, considerando los montos comprometidos y que se realizaron en un período de meses en un mismo año calendario, por lo cual su ponderación integral resultaba indispensable.

En el mismo sentido, debió a lo menos plantearse como hipótesis formal de trabajo, asentada en su informe, la calificación de la anterior auditora respecto de operaciones similares con resultado neutro, que la autoridad ha calificado como operaciones simuladas. Corresponde precisar, además, que este no es un punto en actual discusión, al ser abordado en resoluciones previas a la impugnada.

Se debe tener en consideración igualmente, que tanto la empresa de auditoría externa, en la prestación de sus servicios, como las personas que en su nombre participan en sus labores, responden de culpa leve por todos los perjuicios que ocasionen como consecuencia de su desempeño, según lo dispone el artículo 249 de la Ley





18.045, que importa aquella falta de diligencia y cuidado que las personas emplean ordinariamente en sus negocios propios, la cual se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El profesor Enrique Cury expresó que actúa culposamente quien omite imprimir a su acción la dirección final que era capaz, permitiendo así la desviación del curso causal hacia la producción de resultados indeseables, en que aun cuando no existan normas que indiquen como obrar - que en este caso si las hay -, pues lo que se trata de establecer es si en el hecho existió la posibilidad de manejar las cosas con más cuidado, conducta que le es exigible por la obligación general de cuidado (Derecho Penal, pág. 326 a 332), que le puede ser requerida especialmente por la vinculación a disposiciones legales, reglamentarias, buenas prácticas e incluso la obligación de que nadie debe dañar a otro, como por el hecho que, en el caso de las empresas auditoras externas, su participación está prevista en beneficio de la comunidad en general, debido a lo cual están vinculadas igualmente con una obligación de seguridad.

En este sentido, específicamente, se debe tener en consideración que la culpa leve impone una actuación de forma diligente o cuidadosa de carácter medio, aquilatado respecto de quien realiza la conducta, en este caso una empresa de auditoría externa que ofrece sus servicios



destacando su reconocida y amplia trayectoria en el tiempo, contando con los conocimientos y la experiencia necesarios para afrontar situaciones complejas en el área financiera-contable, con un enfoque en la identificación oportuna de riesgos, pues tienen presente y destacan su compromiso con el servicio "excepcional" que afirman promocionar, los que en este caso comprende una opinión profesional sobre los estados financieros, bajo la óptica del cumplimiento de los requerimientos del área, como los normativos, con el propósito regular, entre otros, de ser presentada en asambleas de accionistas u obtener créditos bancarios.

En efecto, existen diversas teorías que se refieren a la ponderación de la culpa, la cual, como se ha dicho, en el caso de autos debe ser apreciada en concreto, al formar parte del derecho sancionador en general, puesto que son las circunstancias personales, la naturaleza de la obligación y las circunstancias de tiempo y lugar las que permitirán llegar a decidir su acreditación. El parámetro de comparación y la ponderación específica, se ha dicho que es la de un profesional medio, pero como un experto en el área donde ejerce su actividad, por ello el tipo de comparación será el profesional prudente y diligente de la categoría y clase en la que corresponde encuadrar al prestador del servicio en cada caso concreto. El criterio de la diligencia del buen



profesional queda comprendido dentro del estándar abstracto del "buen padre de familia", que en materia de auditoría financiera - contable queda reflejado, precisamente, en el buen profesional financiero-contable, puesto que es indispensable tener en consideración el contexto en que se desarrolló su trabajo, por ello procede tener presente las condiciones específicas que requiere la labor efectuada, quien prestó el encargo y la naturaleza del mismo, en este caso una auditoría especializada externa a empresas de gran tamaño. Es por este antecedente que ninguna duda cabe que la diligencia exigible a un profesional especialista, de experiencia y que cuenta con los conocimientos apropiados para realizar la auditoría externa a las empresas individualizadas en este proceso, incluye anticipar los riesgos que importa la realización de las operaciones singularizadas en los motivos primero y décimo tercero, todo lo que tiene importancia a la hora de evaluar la excusabilidad de ciertas omisiones. En definitiva, el deber de apreciar en concreto las circunstancias de la conducta, no se opone a la exigencia en el actuar como lo haría un profesional medio, pero de las características específicas del caso y ante un hecho como el materia de autos, reflejado en los considerandos primero y décimo tercero.

Sin entrar a examinar las distintas teorías del elemento subjetivo de la responsabilidad, procede



enfrentar la tarea de ponderar los distintos aspectos que configuran la culpa, como es la imprudencia, negligencia, impericia e inobservancia de los reglamentos.

Así para llegar a una conceptualización adecuada de imprudencia, se debe confrontar tanto la raíz próxima (prudencia) y el concepto que encierra o al que accede (las virtudes cardinales). La prudencia consiste en actuar con reflexión y precaución para no incrementar los riesgos y evitar posibles daños, se dispone la razón para discernir el bien y elegir los medios justos para realizarlos. Ante una situación concreta se debe reflexionar, analizar y luego tomar la decisión correcta. Si se actúa con prudencia se controlan los riesgos, pues se actúa razonando y usando la lógica, de esta manera se medita y prevé las posibles consecuencias y efectos perjudiciales que puedan surgir.

La prudencia, en consecuencia, es una de las cuatro virtudes cardinales, junto a la justicia, la fortaleza y la templanza, que consiste en la capacidad de discernir y distinguir lo que es bueno o malo, para seguirlo o huir de ello (diccionario de la Real Academia de la Lengua española). Al referirse a la prudencia, siempre se piensa en la previsión y la prevención, ya que estos dos conceptos son elementos esenciales de quien debe actuar con cuidado y brindando seguridad en su proceder. Prever es la capacidad de ver con anticipación, de pronosticar



un resultado futuro aproximado cuando se ejecuta una acción. Prevenir consiste en tomar todas las medidas necesarias para que un riesgo no se concrete o un resultado dañoso no se produzca. Puede entonces decirse que el auditor, utilizando su razón y sus conocimientos científicos, debe discernir, prever y prevenir el advenimiento de complicaciones en los aspectos financieros, los cuales debe advertir en su informe, para que no se incrementen los riesgos y se eviten las consecuencias dañosas en una o varias empresas a las que realiza el análisis.

El acto del auditor prudente se basa entonces en el conocimiento profundo de las condiciones de la o las empresas que audita, en la aceptación de las propias limitaciones, la planificación reflexiva del mejor camino en el análisis, la previsión de la mayoría de formas de complicación que puede enfrentar desde el punto de vista financiero, contable, tributario y normativo en general, producto de las acciones e inversiones reflejadas en su contabilidad u otros antecedentes adicionales y la permanente vigilancia de resultados adversos y no deseados.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define en los siguientes términos: Imprudencia: (del latín imprudentia.) f. Falta de prudencia. 2. Acción o dicho imprudente. Temeraria. Der. Punible e inexcusable



negligencia con olvido de las precauciones que la prudencia vulgar aconseja, la cual conduce a ejecutar hechos que, de mediar malicia en el actor, serían delitos.

Respecto de un auditor se puede sostener que la imprudencia consiste en una acción temeraria que se realiza sin considerar o a pesar de haberse previsto un riesgo que puede traer consecuencias negativas para la empresa, no obstante que le origine mayores ingresos. Es la conducta opuesta a la que aconsejarían la experiencia y el buen sentido de un profesional contable en un determinado aspecto de la auditoría o en sus conclusiones.

Un criterio objetivo que puede permitir la calificación de una conducta como imprudente, viene dado por la ausencia de razonamiento respecto de la prevención y previsión en torno a un hecho y se concreta en la siguiente regla: un resultado perjudicial para una empresa, se podrá prever o será objetivamente previsible, si lo hubiera sido para cualquier otro profesional con la experiencia y conocimientos de quien actuó, puesto en la situación del actuante, conociendo los antecedentes del caso, y en el mismo estado técnico-científico de la contabilidad financiera en general, y de la especialidad de auditor en particular.



El auditor, por su obligación de cuidado y como garante respecto de la empresa en particular y de la sociedad en general, está vinculado a realizar sus actos y poner a disposición del interesado todos sus conocimientos, su experticia, habilidades, experiencia, conjugados de acuerdo a la razón, la prudencia y valores éticos imperantes.

Los requisitos de la imprudencia se construyen sobre la base de determinar la ausencia de prudencia: Falta de atención, de prevención y previsión. El profesional actúa con ligereza, sin la cautela que aconsejan los conocimientos y la experiencia, omitiendo tanto el estudio racional y razonable del caso, como de las acciones derivadas de una planificación destinada a enfrentar los efectos y consecuencias más probables que se podrán derivar de un hecho conocido.

En el presente caso la conducta desarrollada omitió efectuarse con la debida atención que imponían las diferentes circunstancias que emanaban de los antecedentes proporcionados.

Siguiendo el análisis, se debe señalar que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española le asigna a negligencia el significado equivalente a descuido, omisión, falta de cuidado y falta de aplicación. Negligente es quien mira con indiferencia. Escribche expresa que es "la omisión del cuidado que se



debe poner en los negocios" (Joaquín Escriche, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, Impresores Eugenio Maillefert y Compañía, París, 1861, página 1334). Conforme a una noción unitaria, "la negligencia significa descuido en las tareas u ocupaciones, omisión o falta de preocupación o de aplicación en lo que se hace o debe hacerse" (Enciclopedia Jurídica Omega, Tomo XX, Bibliografía Omega, Buenos Aires, Argentina, página 193).

En general el derecho se refiere a la negligencia y extrae consecuencia de su concurrencia. En términos amplios se vincula la negligencia con la falta de actividad, por lo que pudo ser evitada desplegando acciones adecuadas para cumplir los estándares de la función o materia específica. Se sanciona esta inactividad por cuanto puede condicionar el cambio de curso normal de los sucesos que permite mantener controlados los riesgos previsible; riesgos que si bien no crea, puede permitir que ocurran con mayores probabilidades, aumentando la magnitud o intensidad de los mismos o sus efectos, de lo que puede desencadenar en un resultado dañino, en circunstancias que cumpliendo diligentemente el cometido minimiza o impide que el riesgo se produzca, como las consecuencias del mismo, de manera tal que no se produce el perjuicio o éste es menor.





La negligencia proviene del latín "negligo": descuido y "nec-lego": dejo pasar. Se llega a conceptuarla como el descuido, omisión o falta de aplicación o diligencia, en la ejecución de un acto que corresponde realizarlo debidamente. Es decir, es la carencia de atención durante el ejercicio de la profesión o encomienda encargada. Puede configurar un defecto o una omisión o un hacer menos, dejar de hacer o hacer imperfectamente lo que no se debe. Es no guardar la precaución necesaria o tener indiferencia por el acto que se realiza. La negligencia es sinónimo de descuido y omisión. Es la forma pasiva de la imprudencia y comprenden el olvido de las precauciones impuestas por la prudencia, cuya observación hubiera prevenido el daño.

El fundamento de la incriminación en la imprudencia y la negligencia es la imprevisión por parte del profesional de un riesgo o resultado previsible.

Siguiendo con el análisis, se puede indicar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la impericia en términos negativos, como la falta de pericia y ésta la entiende como "sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte". Escriche la conceptualiza como "la falta de habilidad en una ciencia o arte que se profesa" (Obra citada página 862). La impericia en un arte o profesión viene determinada por la carencia de los conocimientos, habilidades o destrezas



exigible para ejercerla (Enciclopedia Jurídica Omega, página 203, Tomo XX).

La impericia se refleja en un deficiente desempeño profesional para el cual se requieren conocimientos, capacitaciones y destrezas especiales que no todos poseen. "Esa capacitación es el presupuesto indispensable para que pueda hablarse de impericia en su arte o profesión, puesto que tales conocimientos son los únicos que pueden tomarse como índice de referencia para formarse un juicio de la 'pericia' o 'impericia'. Quien posea los conocimientos indispensables, no podrá decirse que ha obrado con error. A este respecto es conveniente señalar que no podrá calificarse como falta de pericia aquellos procedimientos que se presten a discusión pericial, como sería, por ejemplo, el caso de un médico que emplee determinadas técnicas al ejecutar una operación, sino sólo cuando el técnico carezca de conocimiento que no puede ni debe ignorar en razón de su actividad" (Enciclopedia Jurídica Omega, Tomo XX, página 203). Esta es la apreciación en abstracto, puesto que, no obstante tener todas estas habilidades es posible que sean empleadas en un caso concreto.

De lo expuesto queda en claro que la calificación de la acción como producto de una impericia, nos lleva inmediatamente a determinar la capacitación y conocimientos de quien presta la atención. La impericia



se puede dar en la actividad de los auditores cuando se realiza una acción por un profesional que corresponde a otra especialidad de la cual él carece e, incluso, siendo de su misma especialidad, no la ha desarrollado, no se ha capacitado, no ha adquirido las habilidades que le permiten afrontar, sin riesgo el procedimiento. En efecto, la impericia está determinada por falta de aptitud en la actividad voluntaria que se le comete y acepta enfrentar, de la cual resulta un hecho no querido que origina mayor riesgo o daño. Es por lo anterior que la falta de conocimiento y habilidades de un auditor contable no se refieren a su formación básica fundamental, sino que a la exigible en relación al encargo concreto que enfrenta, la experiencia que se requiere y las habilidades propias del profesional. Además, corresponde apreciar aquellas que empleó concretamente en el procedimiento del cual deriva el daño.

El referente de las prestaciones realizadas por una empresa consultora y de un auditor se encuentra en el hecho que toda empresa que contrata sus servicios debe recibir por parte de la consultora y el profesional a cargo, un informe y servicios de excelencia que ofrece. En el evento que no pueda hacerlo corresponde que lo derive a otro profesional. Si no se actúa conforme a lo



expresado, podría incurrir en responsabilidad por impericia profesional o mala práctica profesional.

Impericia proviene del latín in: privativo, sin; y peritia: pericia. Es la falta total o parcial de conocimientos técnicos, experiencia o habilidad en el ejercicio de la actividad específica que desarrolla el profesional. Es decir, es la carencia de aptitudes, experiencia y conocimientos, teóricos y prácticos, de carácter mínimo o básico que son estrictamente indispensables y necesarios para el correcto desempeño de la profesión, los cuales ha debido emplear en el caso concreto.

La impericia se sanciona por la falta de conocimiento, lo cual deslinda en la imprudencia por la falta de previsibilidad del resultado. Se reprime no la incapacidad genérica del autor, sino el hecho de emprender acciones para las cuales "se sabía incapaz" (imprudencia) o "se debía saber incapaz" (negligencia) y realiza un procedimiento en el que no tiene e ignora las destreza necesaria para practicarlo (impericia en abstracto) o teniendo tales aptitudes no las emplea adecuadamente (impericia en concreto), pero en este último caso se está más en una omisión voluntaria que equivale al dolo.

La infracción a los reglamentos, deberes o procedimientos no requiere de mayor definición, puesto



que importa una conducta por acción u omisión, que tiene por objeto no satisfacer los requerimientos que la autoridad ha entregado al reglar aspectos generales o específicos del ejercicio de una profesión. En lo relativo al ejercicio de la auditoría de los estados financieros de una empresa encontramos un conjunto de disposiciones internacionales de buenas prácticas, como normas constitucionales, legales, reglamentarias, internas de las empresas consultoras y de autorregulación por el Colegio de Contadores Auditores que se refieren a la materia, además de lo cual se encuentra la *lex artis* que está referida a los conocimientos, aptitudes, destrezas, habilidades, técnicas, procedimiento, en fin actividades o diligencias que deben desarrollarse para realizar las acciones que tienen por objeto preservar el correcto ejercicio del comercio y la actividad empresarial.

El primer aspecto que surge inmediatamente es la amplitud con que debe tomarse la expresión reglamentos, a lo cual debe responderse que está relacionada tanto con la normativa dispuesta por el Estado, como a la autorregulación profesional de los contadores y analistas, como la derivada de la *lex artis*, incluso la de las empresas consultoras que emanan de la experiencia, para involucrar, además, las particulares autorizaciones y limitaciones lícitas que puedan expresar los clientes,



determinaciones que razonablemente deben considerarse al realizar la auditoría. Incluso deben considerarse tanto las normas obligatorias y de referencia expedidas por la autoridad, pues ellas son indicadoras de lo que debe ser el correcto proceder.

De acuerdo a lo expresado por la recurrente las normas que regulan los deberes de las empresas auditoras externas se encuentran en los artículos 239, 246 y 248 de la Ley 18.045, los cuales les imponen en la prestación de sus servicios, entre otros deberes, examinar y expresar su opinión profesional con independencia de juicio respecto de la entidad auditada, sobre la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros conforme a las Normas de Auditoría de General Aceptación y las instrucciones que imparta la Superintendencia, en su caso, debiendo fundar "toda opinión, certificación, informe o dictamen en técnicas y procedimientos de auditoría que otorguen un grado razonable de confiabilidad, proporcionen elementos de juicio suficientes, y su contenido sea veraz, completo y objetivo", emitiendo "sus conclusiones respecto de la presentación general de la contabilidad y los estados financieros, indicando con un razonable grado de seguridad, si ellos están exentos de errores significativos y cumplen con los estándares relevantes en forma cabal, consistente y confiable", debiendo "señalar



a la administración de la entidad auditada y al comité de directores, en su caso, las deficiencias que se detecten dentro del desarrollo de la auditoría externa en la adopción y mantenimiento de prácticas contables, sistemas administrativos y de auditoría interna, identificar las discrepancias entre los criterios contables aplicados en los estados financieros y los criterios relevantes aplicados generalmente en la industria en que dicha entidad desarrolla su actividad, así como, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la sociedad y la de sus filiales incluidas en la respectiva auditoría".

Las funciones de los auditores externos, por la importancia de sus dictámenes, tienen una minuciosa reglamentación de sus deberes, obligaciones y prohibiciones, imponiéndoseles la exigencia de obrar con la máxima diligencia en el examen de los estados financieros de las compañías según prescribía el artículo 55 del Reglamento de Sociedades Anónimas, vigente a la época de los hechos. El artículo 55, en sus números 1), 2) y 3) señalaba: "En el cumplimiento de sus funciones el auditor externo debe examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros y expresar su opinión profesional e independiente sobre dichos documentos. Esta función implica entre otras: 1) Examinar con el máximo de



diligencia si los diversos tipos de operaciones realizadas por la sociedad están reflejadas razonablemente en la contabilidad y estados financieros de ésta. 2) Señalar a la dirección de la sociedad las deficiencias que se detecten respecto a la adopción de prácticas contables, al mantenimiento de un sistema contable efectivo y a la creación y mantención de un sistema de control interno adecuado. 3) Velar para que los estados financieros se preparen de acuerdo a los principios y normas contables generalmente aceptados y a las instrucciones dictadas por la Superintendencia en su caso". Por su parte el artículo 56 números 1 ) y 2) disponía: "A los Auditores Externos les corresponde especialmente: 1) Emitir sus informes cumpliendo con las normas de auditoria de aceptación general y en el caso de las sociedades anónimas abiertas con las instrucciones o normas que imparta la Superintendencia. 2) Utilizar técnicas y procedimientos de auditoría que garanticen que el examen que se realice de la contabilidad y estados financieros sea confiable y adecuado y proporcione elementos de juicio válidos y suficientes que sustenten el contenido del dictamen".

A las normas indicadas están sujetos los auditores y a ellas deben someter sus funciones relacionadas con su ejercicio profesional. Pero, como se ha dicho, también les vinculan las Normas de Auditoría Generalmente





Aceptadas (NAGAs), las cuales se dieron por incumplidas por los jueces de la instancia, validando los cargos respectivos en tal sentido, que determina igualmente la infracción normativa antes referida.

En efecto, la autoridad imputa a la Auditora y al socio a cargo de la auditoria que "existen presunciones fundadas en orden a establecer que PWC y el Sr. Javier Gatica Menke habrían infringido las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas que en cada caso se refieren, en la emisión de las opiniones emitidas por PWC respecto de los estados financieros y sus respectivas notas al 30 de junio de 2011 de Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande y al 31 de diciembre de 2011 de Potasios, Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande."

Agrega que "Tales hechos constituirían, además, infracción a los numerales 1) y 3) del artículo 55 y 1) y 2) del artículo 56 del Reglamento de Sociedades Anónimas del D.S. N° 587, de 1982, respecto de los estados financieros consolidados a junio de 2011 de Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande, vigente a la época de los hechos por los que se comunican los presentes cargos."

"Respecto a los estados financieros al 31 de diciembre de 2011, tales hechos serían específicamente reprochables a PWC y al Sr. Javier Gatica Menke, atendidas las falencias detectadas en relación con el



trabajo de auditoría realizado respecto de los estados financieros de Potasios, Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande, por lo que es plausible estimar que su labor no se ajustó a las exigencias definidas en las citadas Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, lo que habría infringido lo dispuesto en los artículos 239, 246 y 248 de la Ley 18.405, en cuanto a que la referida opinión de auditoría carecería de fundamentos técnicos y procedimientos de auditoría confiables en orden a proporcionar elementos de juicio suficientes y al hecho que no se habría efectuado una adecuada evaluación de los principios de contabilidad utilizados por las sociedades auditadas, siendo ello de responsabilidad de la empresa auditora." Además de no haber cumplido las propias normas dispuestas por la empresa de auditoría, PwC.

Los jueces del fondo, como se ha establecido en el motivo primero y décimo tercero, dieron por establecida la infracción de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, debido al antecedente fáctico de su incumplimiento. Dicha transgresión se circunscribe a las siguientes:

**I.- Sección AU 230** de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas sobre el "Debido cuidado profesional en la ejecución del trabajo", párrafos 1, 5,



6, de "Introducción"; párrafos 7 a 9 que tratan del "Escepticismo Profesional", y párrafos 10 y 11 que menciona temas de "Razonable Seguridad". Norma que dispone:

"Introducción.

"1. La tercera norma general es:"

"En la realización del trabajo y en la preparación del informe, el auditor debe ejercer el debido cuidado profesional".

"5. Un auditor debiera poseer "un grado de habilidad normalmente detentado" por otros auditores y debiera aplicarlo con "razonable cuidado y diligencia" (o sea con el debido cuidado profesional)."

"6. Los auditores debieran ser asignados a trabajos y supervisados en función a su nivel de conocimientos, destrezas y habilidades para que puedan evaluar la evidencia de auditoría que están examinando. El auditor con la responsabilidad final por la auditoría debiera conocer, como mínimo, las normas profesionales pertinentes de contabilidad y auditoría y debiera tener un adecuado conocimiento del cliente (Ver Sección AU 311, párrafo 7, Planificación y Supervisión). El auditor con la responsabilidad final por la auditoría es responsable de la asignación de tareas y supervisión de su equipo de trabajo."

"Escepticismo Profesional"



"7. El debido cuidado profesional requiere que el auditor aplique escepticismo profesional. El escepticismo profesional es una actitud que incluye tener una mente inquisitiva y una evaluación crítica de la evidencia de auditoría. El auditor utiliza su conocimiento, destreza y habilidad requeridos por la profesión de auditoría independiente para realizar con diligencia, de buena fe y con integridad la obtención y evaluación objetiva de la evidencia."

"8. La obtención y la evaluación objetiva de la evidencia de la auditoría requiere que el auditor considere la competencia y suficiencia de esa evidencia. Considerando que la evidencia es obtenida y evaluada a través de la auditoría, el escepticismo profesional debiera ser aplicado durante todo el proceso de la auditoría."

"9. El auditor no presume que la Administración sea deshonesto ni que sea de una honestidad incuestionable. Al aplicar su escepticismo profesional, el auditor no debiera satisfacerse con menos evidencia persuasiva, por suponer que la Administración es honesta."

"Razonable seguridad"

"10. Al ejercer el debido cuidado profesional, el auditor debe planificar y efectuar la auditoría para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría de tal manera que el riesgo de auditoría se limite a un bajo



nivel que sea, a su juicio profesional, apropiado para expresar una opinión sobre los estados financieros. El alto nivel de seguridad, pero no absoluto, que el auditor obtenga, se expresa en el informe de auditoría como la obtención de una seguridad razonable sobre si los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas (ya sea, causadas por error o fraude). Una seguridad absoluta no es alcanzable debido a la naturaleza de la evidencia de auditoría y a las características de los fraudes. Por lo tanto, una auditoría efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas podría no detectar una representación incorrecta significativa.”

“11. El objetivo del auditor independiente es obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría que le proporcionen una base razonable para formarse una opinión. La naturaleza de la mayoría de la evidencia proviene, en parte, del concepto de efectuar pruebas selectivas a la información que está siendo auditada, lo cual implica juicio profesional respecto tanto a las áreas a ser examinadas selectivamente, como a la naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas a ser efectuadas. Además, se requiere de juicio profesional para interpretar los resultados de las pruebas de auditoría y evaluar la evidencia de auditoría correspondiente. Aún con buena fe e



integridad se pueden cometer equivocaciones y errores de juicio profesional."

"Además, la información contable incluye estimaciones, cuya medición es inherentemente incierta y que depende del resultado de hechos futuros. El auditor aplica su juicio profesional al evaluar la razonabilidad de las estimaciones contables, basado información que razonablemente pueda estar disponible antes de finalizar su trabajo en terreno. Como consecuencia de estos factores, en una gran mayoría de casos, el auditor tiene que confiar en evidencia que es más bien persuasiva que convincente.

**II.- Sección AU 311** de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, sobre la "Planificación y Supervisión", párrafos 28 y 31 sobre "Supervisión". La cual indica:

"Supervisión."

"28. La supervisión comprende dirigir el esfuerzo de los integrantes del equipo de auditoría en lograr los objetivos de la auditoría y en determinar si tales objetivos se cumplieron. Los elementos de la supervisión incluyen instruir a los integrantes del equipo de auditoría, mantenerse informado de los temas significativos encontrados, revisar el trabajo realizado y administrar las diferencias de opinión entre los integrantes del equipo. El grado de supervisión apropiado



en una determinada situación depende de muchos factores, incluyendo la complejidad del tema, la experiencia de las personas que están realizando el trabajo, el conocimiento del negocio y de la industria del cliente."

"31. El trabajo realizado por cada integrante del equipo de auditoría, incluyendo la documentación de auditoría, debiera ser revisado para determinar si fue realizado y documentado adecuadamente y para evaluar los resultados, relativos a las conclusiones a ser presentadas en el informe de auditoría. La persona con responsabilidad final de la auditoría puede delegar partes de la responsabilidad de revisión a otros asistentes, de acuerdo con el sistema de control de calidad de la firma. Ver Sección AU 339, Documentación de Auditoría, para una guía respecto a documentar la revisión de la documentación de auditoría."

**III.- Sección AU 314** de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, sobre "Entendimiento de la Entidad y de su Entorno y Evaluación de los Riesgos de Representaciones Incorrectas Significativas", párrafos 4 de "Introducción", párrafo 19 de "Análisis entre los miembros del equipo de auditoría" y 121 que trata la "Revisión de la evaluación de riesgos".

Normas que establecer lo siguiente:

"Introducción"



"4. El auditor debiera utilizar su juicio profesional para determinar el alcance del entendimiento requerido de la entidad y de su entorno, incluyendo su control interno. La principal consideración del auditor es si el entendimiento que se ha adquirido es suficiente para evaluar los riesgos de representaciones incorrectas significativas en los estados financieros y diseñar y efectuar procedimientos de auditoría adicionales. La profundidad del entendimiento general que el auditor obtiene al efectuar la auditoría es menor que el que posee la Administración por administrar la entidad."

"Análisis entre los miembros del equipo de auditoría."

"19. El auditor debiera planificar y efectuar la auditoría con una actitud de escepticismo profesional. El análisis entre los miembros del equipo de auditoría debiera enfatizar la necesidad de ejercer un escepticismo profesional durante el trabajo, estar alerta a información u otras condiciones que indiquen que una representación incorrecta significativa debido a un fraude o error puede haber ocurrido y ser riguroso en hacer un seguimiento de tales indicios."

"Revisión de la evaluación de riesgos"

"121. La evaluación del auditor de los riesgos de representaciones incorrectas significativas a nivel de la afirmación pertinente se basa en la evidencia de





auditoría disponible y puede cambiar durante el transcurso de la auditoría al obtener evidencia de auditoría adicional. Particularmente, la evaluación del riesgo se puede basar en una expectativa que los controles están operando efectivamente para prevenir o detectar y corregir representaciones incorrectas significativas a nivel de la afirmación pertinente. Al efectuar pruebas de los controles para obtener evidencia de auditoría sobre la efectividad de la operación, el auditor puede obtener evidencia de auditoría que los controles no están operando efectivamente en momentos pertinentes durante la auditoría. De igual manera, al efectuar procedimientos sustantivos, el auditor puede detectar representaciones incorrectas por montos o por frecuencias que son mayores que aquellas contempladas en la evaluación de riesgos del auditor. Cuando el auditor obtiene evidencia de auditoría después de efectuar procedimientos de auditoría adicionales que tiende a contradecir la evidencia de auditoría sobre la cual el auditor basó originalmente la evaluación, el auditor debiera modificar la evaluación y consecuentemente debiera además modificar los procedimientos de auditoría planificados. Ver los párrafos 70 y 74 de la Sección AU 318 para guías adicionales."

**IV.- Sección AU 318** de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, sobre la "Realización de



procedimientos de auditoría en respuesta a los riesgos evaluados y a la evaluación de la evidencia de auditoría obtenida", párrafos 70, 71, 74, 75 y 76, que trata sobre la "Evaluación de la suficiencia y de lo apropiado de la evidencia de auditoría obtenida".

Normas que disponen:

"Evaluación de la suficiencia y de lo apropiado de la evidencia de auditoría obtenida."

"70. A base a los procedimientos de auditoría efectuados y a la evidencia de auditoría obtenida, el auditor debiera evaluar si la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas a nivel de la afirmación pertinente siguen siendo apropiadas."

"71. Una auditoría de estados financieros es un proceso acumulativo e iterativo. A medida que el auditor efectúa procedimientos de auditoría planificados, la evidencia de auditoría obtenida puede hacer que el auditor modifique la naturaleza, oportunidad y alcance de otros procedimientos de auditoría planificados. La información puede llamar la atención del auditor en cuanto a que difiere significativamente de la información en la cual se basaron las evaluaciones de riesgo. Por ejemplo, el alcance de representaciones incorrectas que el auditor detecta efectuando procedimientos sustantivos puede alterar el juicio del auditor acerca de las evaluaciones de riesgo y puede indicar una debilidad



importante en el control interno. Además, los procedimientos analíticos efectuados en la etapa de revisión general de la auditoría pueden indicar un riesgo de representación incorrecta significativa no reconocido anteriormente (ver Sección AU 329). En tales circunstancias, el auditor debiera volver a evaluar los procedimientos de auditoría planificados a base de la consideración modificada de la evaluación de riesgos para todas o algunas de las afirmaciones pertinentes relacionadas con clases de transacciones, saldos de cuentas o revelaciones. El párrafo 121 de la Sección AU 314 contiene mayores guías respecto a la modificación de la evaluación de riesgo efectuada por el auditor.”

“74. El auditor debiera concluir si se ha obtenido suficiente y apropiada evidencia de auditoría para reducir el riesgo de representación incorrecta significativa en los estados financieros a un nivel apropiadamente bajo. Al formarse una opinión, el auditor debiera considerar toda la evidencia de auditoría pertinente, independientemente de si parece corroborar o contradecir las afirmaciones pertinentes en los estados financieros.”

“75. La suficiencia y lo apropiado de la evidencia de auditoría para respaldar las conclusiones del auditor durante toda la auditoría es un asunto de juicio profesional.



"El juicio del auditor en cuanto a qué constituye suficiente y apropiada evidencia de auditoría, se ve influenciado por factores, tales como:

- Importancia de la representación incorrecta potencial en la afirmación pertinente y la probabilidad que tenga un efecto significativo, por si mismo o en conjunto con otras representaciones incorrectas potenciales, sobre los estados financieros.

- Efectividad de las respuestas y controles de la Administración para tratar los riesgos.

- Experiencia obtenida durante la realización de auditorías anteriores con respecto a representaciones incorrectas potenciales similares.

- Resultados de procedimientos de auditoría efectuados, incluido el hecho de si tales procedimientos de auditoría identificaron casos específicos de fraude o error.

- Fuente y fiabilidad de la información disponible.

- Lo persuasivo de la evidencia de auditoría.

- Entendimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno."

"76. Si el auditor no ha obtenido suficiente y apropiada evidencia de auditoría en cuanto a una afirmación significativa de los estados financieros, el auditor debiera intentar obtener mayor evidencia al respecto. Si el auditor no puede obtener suficiente y



apropiada evidencia de auditoría, debiera expresar una opinión con salvedades o una abstención de opinión de auditoría."

**V.- Sección AU 326** de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, sobre la "Evidencia de Auditoría", párrafo 1 de "Introducción"; y párrafos 6 y 13 que tratan la "Evidencia de Auditoría Suficiente y Apropiable". La cual expresa:

"Introducción."

"1. Esta Sección proporciona guías respecto a conceptos relacionados con la tercera norma de trabajo en terreno: "El auditor debe obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría, realizando procedimientos de auditoría para lograr una base razonable para poder expresar una opinión sobre los estados financieros que se están auditando". Esta Sección:

- Define "evidencia de auditoría";
- Define "afirmaciones pertinentes" y analiza su uso en la evaluación de riesgos y en el diseño de apropiados procedimientos de auditoría adicionales;(1)
- Analiza aspectos cualitativos que el auditor considera para determinar la suficiencia y lo apropiada de la evidencia de auditoría, y
- Describe varios procedimientos de auditoría y analiza los propósitos para los cuales éstos pueden ser aplicados."



"6. La "suficiencia" es la medición de la cantidad de evidencia de auditoría. Lo "apropiada" es la medición de la calidad de la evidencia de auditoría, es decir, su pertinencia y su confiabilidad para proporcionar respaldo para, o detectar representaciones incorrectas en las afirmaciones relacionadas con clases de transacciones, saldos de cuentas y revelaciones. El auditor debiera considerar la suficiencia y lo apropiada de la evidencia de auditoría a ser obtenida al evaluar los riesgos y diseñar procedimientos de auditoría adicionales. La cantidad de evidencia de auditoría necesaria es afectada por el riesgo de representaciones incorrectas (mientras más alto sea el riesgo, es probable que se requerirá mayor cantidad de evidencia de auditoría) y también por la calidad de tal evidencia de auditoría (mientras mejor sea la calidad, menor puede ser la cantidad de evidencia de auditoría requerida). Consecuentemente, la suficiencia y lo apropiada de la evidencia de auditoría están interrelacionados. Sin embargo, obtener solamente más evidencia de auditoría puede no compensar si ésta es de inferior calidad."

"13. En el proceso de formarse una opinión de auditoría, el auditor no examina toda la información disponible (evidencia) debido a que generalmente se pueden alcanzar conclusiones utilizando muestreos y otros medios de selección de las partidas a ser revisadas.



Además, el auditor puede estimar que es necesario confiar en evidencia de auditoría que es persuasiva en vez de concluyente. Sin embargo, para obtener una seguridad razonable, (4) el auditor no debe quedar satisfecho con evidencia de auditoría que es menos que persuasiva. El auditor debiera usar su juicio profesional y debiera ejercer escepticismo profesional en la evaluación de la cantidad y la calidad de la evidencia de auditoría y consecuentemente su suficiencia y cuán apropiada es para respaldar la opinión de auditoría."

**VI.- Sección AU 334** de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, sobre "Partes Relacionadas", párrafo 11 que trata la "Revelación". La cual expresa:

"Revelación."

"11. Por cada transacción significativa con partes relacionadas (o acumulación de transacciones similares) o propiedad en común o relación de control de la Administración para las que la NICCH 24 requiere revelación, el auditor debiera considerar si ha obtenido suficiente y apropiada evidencia de auditoría para entender la relación de las partes y, para las transacciones con partes relacionadas, los efectos de la transacción sobre los estados financieros. Luego debiera evaluar toda la información disponible referente a la transacción con partes relacionadas o con relación de control y debiera satisfacerse a base de su criterio



profesional que está adecuadamente revelada esa información en los estados financieros."

**VII.- Sección AU 339** de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, sobre "Documentación de Auditoría", párrafo 4 de "Introducción" y párrafos 14 y 16 que tratan los "Hallazgos o asuntos importantes". Norma que indica:

"Introducción"

"4. La documentación de auditoría es un elemento esencial de la calidad de la auditoría. Aún cuando, la documentación por sí sola no garantiza la calidad de la auditoría, el proceso de preparar suficiente y apropiada documentación contribuye a la calidad de una auditoría."

"Hallazgos o asuntos importantes."

"14. El auditor debiera documentar los hallazgos o asuntos importantes, las acciones tomadas para abordarlos (incluyendo cualquier evidencia adicional obtenida) y la base para las conclusiones finales que se alcanzaron. Juzgar la importancia de un hallazgo o asunto requiere de un análisis objetivo de los hechos y de las circunstancias. Hallazgos o asuntos importantes son, entre otros:

"a. Asuntos importantes que impliquen la selección, aplicación y uniformidad de los principios contables respecto a los estados financieros, incluyendo las respectivas revelaciones. Tales asuntos incluyen, pero no





están limitados a: (a) la contabilización de transacciones complejas o inusuales, o bien (b) las estimaciones contables y las incertidumbres y, si fuere aplicable, las respectivas presunciones hechas por la Administración."

"b. Resultados de los procedimientos de auditoría indicando: (a) que la información financiera o revelaciones podrían estar representadas incorrectamente de forma significativa, o bien (b) la necesidad de revisar la evaluación previa del auditor de los riesgos de representaciones incorrectas significativas y la respuesta del auditor a esos riesgos."

"c. Circunstancias que provoquen dificultad para que el auditor aplique procedimientos de auditoría que éste considere necesarios. (4) Por ejemplo, ausencia de respuesta a solicitudes de confirmación o de información requeridas o bien la falta de documentos originales."

"d. Hallazgos que pudiesen resultar en una modificación del informe del auditor."

"e. Ajustes de auditoría. Para efectos de esta Sección, un ajuste de auditoría es una corrección de una representación incorrecta que el auditor detecta en la información financiera (esté o no registrado por la Administración), que podría, individualmente o en conjunto con otras representaciones incorrectas, tener un



efecto significativo sobre la información financiera de la entidad."

"16. Si el auditor ha identificado información que contradiga o no es consecuente con sus conclusiones finales respecto a un hallazgo o asunto importante, el auditor debiera documentar la forma en que abordó esta contradicción o inconsecuencia para llegar a su conclusión.

**VIII.- Sección AU 411** de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, sobre "El Significado de "Presentan Razonablemente de Acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados", párrafos 1 y 5 de "Introducción". La que dispone:

"Introducción."

"1. El informe de un auditor independiente contiene una opinión respecto a si los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera, resultados de sus operaciones y flujos de efectivo de una entidad, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. También se requiere la identificación del país de origen de esos principios de contabilidad generalmente aceptados (Ver Sección AU 508, párrafo 8h)."

"5. Los principios de contabilidad generalmente aceptados reconocen la importancia de informar transacciones y hechos de acuerdo con su esencia. El



auditor debiera considerar si la esencia de las transacciones o hechos difiere significativamente de su forma."

**IX.- Sección AU 722** de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, sobre "Revisión de Información Financiera Intermedia", párrafo 22 de "Procedimientos analíticos, indagaciones y otros procedimientos de revisión". La cual recomienda:

"22. Ampliación de los procedimientos de una revisión intermedia. Si al efectuar una revisión de información financiera intermedia el auditor toma conocimiento de información que lo induzca a pensar que la información financiera intermedia podría no estar de acuerdo con el marco aplicable para el proceso de preparación y presentación de información financiera en todos sus aspectos significativos, el auditor debiera efectuar indagaciones adicionales o efectuar otros procedimientos que considere apropiados para proporcionar una base para informar si tiene conocimiento de cualquier modificación significativa que debiera efectuarse a la información financiera intermedia. Por ejemplo, si los procedimientos de revisión intermedia del auditor lo inducen a cuestionar si una venta significativa está contabilizada de acuerdo con el marco aplicable para el proceso de preparación y presentación de información financiera, éste debiera efectuar procedimientos



complementarios, tales como analizar los términos de la transacción con ejecutivos de las áreas de marketing y de contabilidad, leer el contrato de venta, o ambos, para resolver sus dudas al respecto.”

Tales disposiciones técnicas, si bien no puede ser denunciada su errada aplicación por medio del recurso de casación en el fondo, de su lectura, tal como concluyen los jueces del grado, queda en evidencia que la auditora en sus informes no los respetó, puesto que en ellos se impone un análisis pormenorizado y exhaustivo de los antecedentes, relevando todos los hechos que alerten sobre riesgos o inconsistencias.

Omite esta Corte, por no ser un antecedente de derecho, una ponderación mayor de las Internacional Financial Reporting Standards (IFRS) o Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), aludidas por la recurrente, puesto que, como se dejó establecido, no se ha deducido recurso de casación en la forma por falta de argumentación de la decisión de fondo. En todo caso, las presunciones fijadas por los jueces del grado, son suficientes justificaciones de la determinación que se revisa.

No obstante lo anterior, para un total esclarecimiento de los aspectos técnicos expresados, resulta pertinente indicar, en cuanto a la observación manifestada por la recurrente respecto del Marco



Conceptual que ampara las auditorías externas y, por lo mismo aplicable a la desarrollada por la empresa PwC y su socio responsable materia de la sanción.

En efecto, se ha expresado que las Normas Internacionales de Información Financiera "proporcionan principios generales para poder conversar en un lenguaje contable común", de forma tal que la aplicación de las normas y disposiciones que contienen constituye una tarea fundamental, en la cual "prevalece la fiabilidad y relevancia de la información financiera, características fundamentales que transforman un simple conjunto de datos en información útil para ser analizada por una amplia gama de usuarios en su proceso de toma de decisiones". "Las IFRS no son un ejercicio matemático que finaliza en un registro contable ... de hecho la contabilidad no lo es. Las NIIF pretenden plasmar en unos estados financieros cómo una empresa gestiona su negocio y distintas actividades, focalizándose en el fondo económico de las transacciones; con independencia de su forma legal o reguladora." Es por ello que "el concepto 'implícito' incorpora precisamente la esencia de una transacción sobre su forma. Esto se explica porque estas normas no recaen sobre industrias, sino sobre transacciones." "Por consiguiente, para poder aplicar en forma apropiada y correcta una determinada NIIF a un fenómeno económico en particular, un primer paso que resulta crucial y crítico



es la clasificación de ese fenómeno económico que se traducirá en un elemento de los estados financieros ..."

"Una vez que un elemento en particular se ha identificado y clasificado, estaremos en condiciones de reconocerlo contablemente en forma adecuada, como también de medirlo y revelarlo." De esta forma "todo el proceso de representar fielmente un fenómeno económico en la contabilidad depende de su clasificación, fase que se constituye en un primer paso crítico ...", de manera que resulta indispensable comenzar "con el proceso contable general aplicable a la transacción a analizar."

Antecedente que se une a la medición como elemento relevante en el análisis contable, que consiste en "determinar y asignar el valor de una partida de la información financiera. Las IFRS definen la medición como el 'Proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros, para su inclusión en el balance y en el estado de resultados'". "Por consiguiente, resulta crucial como primer paso la adecuada clasificación de la transacción o hecho económico que se pretende representar en la información financiera de una entidad, para luego poder reconocer y medir apropiadamente dicho fenómeno económico; con la finalidad de presentar información fiel y relevante" (Verónica Ruz Farías, Una Doctrina Sobre las IFRS,



Segunda edición 2014, Smart Ediciones Limitada, páginas 4 y 5).

Siguiendo tales ideas, el Marco Conceptual “provee los conceptos claves y principios fundamentales sobre los que descansan las IFRS y que subyacen en la preparación y presentación de los estados financieros para usuarios externos.” Siempre considerando que lo anterior se refiere a una empresa en marcha y funcionando, con la intención de continuar sus actividades de manera importante en el futuro. “Esto es importante porque la información sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informa y sus cambios durante el período proporciona una mejor base para evaluar el rendimiento pasado y futuro de la entidad que la información únicamente basándose en cobros y pagos del ejercicio.” “La información debe ser tanto relevante como fielmente representada para que sea útil para los usuarios; por ello, el Marco Conceptual define dos características cualitativas fundamentales: relevancia y representación fiel.” La primera está dada “cuando ejerce influencia sobre las decisiones económicas de los usuarios que utilizan la información financiera”, especialmente en cuanto se emplea para un aspecto predictivo o confirmatorio. La segunda cualidad se refiere a la descripción completa, neutral y libre de error, incluyendo toda la información necesaria para



comprender la marcha de la entidad, con todas sus descripciones y explicaciones necesarias, libres de todo sesgo o prejuicio en su selección o representación y con la mayor exactitud posible.

"El Marco Conceptual reconoce que existen fenómenos complejos que puede resultar difícil de comprenderlos; sin embargo no se debiera excluir información relevante por el simple hecho de su difícil comprensión, ya que entonces la información económica no sería completa e inclusive podría resultar potencialmente engañosa, como lo sugiere el Marco Conceptual." (Ruz, obra citada páginas 32 y 33).

Si bien la NIC 8 desarrolla la utilización de las fuentes normativas, la presentación de los estados financieros consolidados de una entidad controladora, deben serlo de manera razonable, reflejando el negocio en marcha de manera fidedigna respecto de la situación financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo, que difieren de los estados financieros individuales o separados, puesto que los estados financieros consolidados incluyen el estado de situación financiera (balance general), un estado de resultado y otro integral, **un estado de cambio de patrimonio** y el estado de flujo efectivo, más las respectivas notas e información comparativa a los estados financieros requeridos" de acuerdo con las NIC e IFRS en general, en





donde la "controladora (o indistintamente la matriz) debe incluir en sus estados financieros consolidados a todas sus subsidiarias, sus asociadas y su participación en acuerdos controlados en forma conjunta. Por ello, a veces se menciona que una inversión en asociada (o coligada) se consolida, desde el punto de vista que debe ser incluida en los estados financieros consolidados, pero presentando el valor razonable de los activos netos (o patrimonio de la coligada ajustado a su valor razonable) en una sola línea, procedimiento que llamamos localmente 'VP' (valor patrimonial), que es el equivalente al método de la participación citado en IFRS." (Ruz, obra citada páginas 173 y 174).

"En nuestro país, la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas obliga a una entidad que posee inversiones en sociedades filiales (subsidiarias) a confeccionar estados financieros consolidados; definiéndose subsidiaria como aquella entidad sobre la cual una empresa controla directamente o a través de otra persona natural o jurídica más del 50% de su capital con derecho a voto o del capital, si no se tratare de una empresa por acciones o puede elegir o designar a la mayoría de sus directores o administradores, ya sea directa o indirectamente."

"El concepto de control entregado por la normativa internacional y, en específico, por NIIF 10, es más amplio que el señalado en el párrafo precedente. Por



tanto, podemos anticipar que las empresas que tienen que incluir en los estados financieros consolidados son todas aquellas en las cuales una entidad llamada 'controladora' ejerce control sobre el resto, ya sea directa o indirectamente, independiente de la forma y/o estructura legal que respalde dicha relación. No es requisito bajo IFRS que la controladora tenga una participación en el patrimonio de una entidad, como puede suceder con ciertas entidades estructuradas ..." (Ruz, obra citada página 99). Lo relevante es que tenga poder sobre otra sociedad, en términos tales que le permita dirigir las actividades relevantes, afectando de manera significativa sus rendimientos, al poder dirigir sus actividades estratégicas, operacionales y financieras (ver Ruz, págs. 104 y siguientes).

Como se ha dejado establecido, estimando la autoridad que en aquel oficio de formulación de cargos se había incurrido en una referencia no precisa al hacer alusión al "principio de la esencia sobre la forma", resolvió dictar el Oficio Reservado N° 69, de 23 de enero de 2015, a través del cual se reformulan los cargos en orden a reemplazar aquella referencia por el principio de "Representación Fiel" del "Marco Conceptual para la Información Financiera", manteniendo la formulación de cargos primigenia en todo lo demás y otorgando un nuevo término a los reclamantes de hacer descargos, ampliar,



modificar y complementar los ya realizados, lo cual fue efectuado por los actores, todo lo cual carece de la importancia atribuida por el sancionado, puesto que "el Marco Conceptual no es una IFRS en sí y no tiene poder derogatorio sobre alguna de ellas; reviste importancia dado que ayuda a la gerencia de una empresa al aplicar las IFRS, así como también para tratar temas no cubiertos por alguna de ellas o sus interpretaciones." (Ruz, obra citada pág. 40). Es por tal razón, incluso que solamente tiene una aplicación subsidiaria, luego de las normas específicas y como criterio de interpretación, junto a la analogía de normas que traten temas similares (ver Ruz obra citada págs. 61 y siguientes).

Específicamente, se señala en su regulación que conceptualmente el Marco Conceptual tiende a "ayudar a las personas encargadas de preparar los estados financieros en la aplicación de las NIIF y en el tratamiento de algunos aspectos que todavía no han sido objeto de una NIIF"; "ayudar a los auditores a formarse una opinión acerca de si los estados financieros están de acuerdo con las NIIF" y "ayudar a los usuarios de los estados financieros a interpretar la información contenida en los estados financieros preparados de acuerdo con las NIIF", entre otros objetivos. Por ello que se insiste en que el "Marco Conceptual no es una NIIF, y por tanto no define normas para ninguna cuestión



particular de medida o información a revelar. Ningún contenido de este Marco Conceptual deroga una NIIF específica. El Consejo (de IASB, International Accounting Standards Board) reconoce que en un limitado número de casos puede haber un conflicto entre el Marco Conceptual y una NIIF. En esos casos en que exista conflicto, los requerimientos de la NIIF prevalecerán sobre los del Marco Conceptual.” (El Marco Conceptual para la Información Financiera, regulación emitida por el IASB en septiembre de 2010).

**Vigésimo sexto:** Que las disposiciones aplicables al caso y ponderadas en el curso de esta sentencia, no resultan cumplidas por la consultora PwC y su socio responsable Javier Gatica, sustento de la sanción aplicada por la entidad fiscalizadora y que, igualmente, se ha dado por establecido por los jueces de la instancia.

El informe suscrito por un socio de la empresa auditora externa y así confeccionado, se debería concurrir a exponer en las juntas de accionistas para responder las consultas que se le formulen respecto del mismo, como de las actividades, procedimientos, constataciones, recomendaciones y conclusiones, que sean pertinentes, lo cual deja en claro que uno de los objetivos del informe es dar cuenta integral a la junta de accionistas.



En el caso de autos, la sancionada se ha tratado de excusar alegando que dio cumplimiento a sus obligaciones, específicamente analizando los asientos contables de cada sociedad individualmente considerada, los que le imponían extraer como conclusión que se realizaron según fueron efectuadas las operaciones financiero contable. Sin embargo, de la prueba rendida en autos aparece con claridad que dicha observancia no es tal, atendido que no basta en la especie el cumplimiento formal de las cargas que le impone un determinado compromiso, sino que su obligación es llevar a cabo un adecuado desarrollo del análisis financiero contable de todos los asientos en un período, como igualmente relacionarlo con otras sociedades o empresas que están vinculadas de diferentes formas, puesto que su actuar primero está vinculado con garantizar que todas las operaciones se asentaron en los registros contables, pero igualmente que dichas operaciones son regulares conforme a la ley, en términos tales que permita evitar riesgos y daños a la misma empresa o terceros extraños, si el proceder o finalidad puede resultar cuestionable.

En efecto, el elemento subjetivo de la culpa se satisface por el conocimiento de la acción que se desarrollará y los riesgos anormales a que se enfrentará la persona que realice la conducta, cobrando importancia las especiales capacidades y conocimientos técnicos y



fácticos del sujeto actuante, de modo que en este caso la culpa se ha apreciado de acuerdo a las circunstancias y condiciones objetivas de las partes, conforme a las cuales les era exigible una conducta determinada, en este evento el deber de previsión, diligencia y exhaustividad que es posible esperar de ellas, especialmente a las personas que actuaron por la auditora, puesto que para que exista responsabilidad, enseña Marcel Planiol y Jorge Ripert, no es necesario que se haya previsto efectivamente el riesgo o daño preciso que se produjo, sino que basta con que se haya debido prever que iba a resultar un incremento del riesgo o que se produciría con mayor probabilidad el perjuicio derivado del acto o de la omisión (Ver Tratado Práctico de Derecho Civil Francés, Tomo VI, página 719).

Resulta pertinente destacar la doctrina anterior al tener en cuenta que las nuevas normas que constituyen buenas prácticas y que están referidas por la ley, han debido suponer largos estudios para llegar a establecerlas, efectuarse por profesionales calificados y ciertamente su observancia ha debido incorporarse a las auditorías pertinentes que se realizan, puesto que de lo contrario no se está dando cumplimiento integral a la obligación de cuidado y diligencia, todo lo contrario se está asumiendo una conducta descuidada o poco diligente al aceptar un riesgo que en sus consecuencias podrá



afectar a terceros, precisamente a quienes les deben ofrecer un sistema de análisis confiable. Es más, las personas que acceden a los informes de los auditores externos lo hacen en la creencia que se realizan con objetividad y de manera acuciosa, además de la excelencia esperable, generando la seguridad de sus conclusiones que es posible esperar de un servicio moderno, creencia en la cual los reciben, puesto que de lo contrario adoptarían ellos mismos mayores medidas de previsión.

En todo caso, según se ha expresado, el cumplimiento formal de las leyes, reglamentos y buenas prácticas no es suficiente para exculparse de representar operaciones riesgosas, pues como lo exponen los autores en referencia, "para prevenir los daños, la ley y los reglamentos prescriben o prohíben determinados actos. Dado que se reputa que esos cuerpos legales son conocidos por todos, su inobservancia constituye culpa", a lo cual agregan, "pero, la observancia de ellos no dispensa tampoco del deber de conformarse a la obligación general de previsión. El que se ha amoldado a los reglamentos también será responsable si causa un perjuicio que pudo y debió prever" (Ídem, página 720).

La auditora y el ejecutivo a cargo, no han aducido ignorancia o desconocimiento del riesgo de las operaciones descritas en los fundamentos primero y décimo tercero, aceptaron la omisión de consignar lo que ellas



implicaban entre las sociedades auditadas individualmente y no adecuaron su conducta a la obligación de seguridad que les asiste.

Todas estas pruebas aportadas por las partes y el análisis de los antecedentes permiten fundar a los jueces de la instancia el incumplimiento de sus obligaciones por parte de las sancionadas y descartar que se les exima de responsabilidad por el cumplimiento parcial y formal de sus obligaciones, conducta que evidencia un abandono de su deber de seguridad, el que tiene por único sustento el no querer incurrir en juicios en contra de quien les ha contratado.

Sin duda, el tema de mayor importancia sobre infracción de los reglamentos ha sido abordado con motivo del análisis de la culpa contra la legalidad o regulación de la actividad, esto es que la trasgresión de una norma de conducta no determina por sí sola la acreditación de la culpa y es igualmente necesario establecer los aspectos objetivos y subjetivos que la conforman, además de la vinculación entre ellas, puesto que dicho proceder infraccional solamente corresponde configurarlo como una presunción de responsabilidad. La satisfacción de esta premisa ha determinado profundizar en el análisis, no solamente para descartar los errores de derecho, sino que igualmente para dejar señalado que efectivamente la





auditora y el socio a cargo incurrieron en las infracciones por las cuales fueron sancionados.

Además de todo lo expuesto, debe dejarse dicho que resulta preocupante la defensa de la auditora y el socio a cargo, cuando expresamente señala que de la revisión de las transacciones de 2010 y 2011 "surgía claramente que existió/existieron otra/s contraparte/s en ambas operaciones. A este respecto, la Superintendencia reconoce que, a diferencia de lo ocurrido en relación a las operaciones efectuadas durante diciembre de 2010, respecto de las cuales "Ernst & Young", auditora de aquel periodo, cuestionó el registro de la utilidad generada por las operaciones de compra y venta de acciones de SQM-A, en el caso de la operación de venta y compra de acciones suscitada el día 29 de marzo de 2011, "se cumplió formalmente la condición señalada por la auditora, puesto que en dichas operaciones, participó un tercero distinto de las Sociedades del grupo controlador." (Párrafo 1201. Res. Exenta N° 223/ 2014)."

Agregando que aquel reconocimiento, "en orden a haberse cumplido con la condición señalada por E&Y por haber participado en la operación de marzo de 2011 un tercero distinto de las Sociedades del Grupo Controlador, es de suma importancia", toda vez que la SVS ha efectuado una labor impropia al sostener, en la resolución de sanción, "que la sola circunstancia de haber sido



ejecutadas las operaciones descritas en bolsa seria suficiente, de acuerdo al criterio de PwC, y del socio a cargo, para descartar que una transacción sea entre empresas relacionadas, afirmación que en caso alguno debe desprenderse de los descargos de sus representados".

Sin embargo, luego agrega que la autoridad "prescinde de analizar la intervención de un tercero en las operaciones de marzo de 2011, y que precisamente, reconoce la SVS, evidencia el cumplimiento impuesto por la Auditora E&Y para no ser considerada como operación entre partes relacionadas, debido a la participación de "un tercero distinto de las Sociedades del grupo Controlador".

Continuando, contra-argumenta al señalar que lo sostenido por su parte es "que si bien es posible adoptar un criterio inicial general según el cual las transacciones de acciones efectuadas en un mercado abierto son en principio transacciones entre partes no relacionadas, dicho criterio deriva, tal como lo explica claramente en nuestros descargos, en un tratamiento diverso según se declare la intención contraria por parte del Órgano competente de acuerdo a la legislación y si existieran transacciones en mercado abierto en las cuales además intervinieran "traders" o entidades dedicadas a obtener rentabilidad de corto plazo a través de la



negociación de valores, independiente de la calificación otorgada, constituyen transacciones entre partes independientes, y es precisamente este último criterio el que se sostiene habría sido compartido también por el equipo de trabajo de la empresa de auditoría externa que dictaminó los estados financieros al 31 de diciembre de 2010, quienes, al expresar su discrepancia con el tratamiento contable de ciertas operaciones de diciembre de 2010, y tal como lo señala la SVS en su reservado 1534 -apartado 17.a.2.ii), afirmaron que "...si podrían aceptar la utilidad en la medida que las operaciones hubiesen sido realizadas con un tercero... ", lo cual surge también de sus papeles de trabajo correspondientes a la lectura de actas de directorio de Pampa Calichera."

"A su turno, según consta del Acta de Sesión Extraordinaria de Directorio de fecha 28 de marzo de 2011 que se tuvo a la vista, cuyo extracto se encuentra en los papeles de trabajo de la Auditora correspondientes a la revisión limitada de los estados financieros al 30 de junio de 2011 y a la auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 de Pampa Calichera, el Directorio de esta última aprobó otorgar a Oro Blanco un crédito por hasta US\$300.000.000 con una tasa de interés del 5% anual. A dicha sesión asistieron los directores Julio Ponce Lerou, Luis Eugenio Ponce Lerou, Patricio Phillips Sáenz, Francisca



Ponce Pinochet, Julio Ponce Pinochet y Pablo Guerrero Valenzuela, todos quienes aprobaron por unanimidad el otorgamiento de dicho crédito."

Señala que "consta del Acta de Sesión Extraordinaria de Directorio de fecha 28 de marzo de 2011 que se tuvo a la vista, cuyo extracto se encuentra en los papeles de trabajo correspondientes a la revisión limitada de los estados financieros al 30 de junio de 2011, y a la auditoria de los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 de Oro Blanco, el que se informa el otorgamiento de parte de Pampa Calichera a Oro Blanco de un crédito por hasta US\$300.000.000 con una tasa de interés del 5% anual."

Reconoce que se "informó además expresamente que el destino del crédito seria la adquisición de acciones SQM-A en el mercado. A dicha sesión asistieron los directores Julio Ponce Lerou, Luis Eugenio Ponce Lerou, Francisca Ponce Pinochet, Julio Ponce Pinochet, Roberto Izquierdo Menéndez (director independiente y miembro del Comité de Directores) y Pablo Guerrero Valenzuela (director común con Pampa Calichera y miembro del Comité de Directores), quienes aprobaron por unanimidad dicho crédito."

Sostiene que "En términos de los pagos y cobros de las transacciones, ambas generaron flujos de caja efectivos, y las operaciones en cuestión fueron



reveladas en las notas a los estados financieros de las sociedades.

Sostiene, además, que "aun considerando la hipótesis de discusión en torno a si tales operaciones debieron o no ser identificadas y tratarse como transacciones entre partes relacionadas, debe ponderarse adecuadamente que la conducta de venta y compra de los títulos SQM-A "(...) se habría formalmente ajustado a las normas que regulan las transacciones bursátiles descritas", y que la conclusión de la SVS en orden a la falta de coincidencia entre el sentido genuino de una operación de compra y venta de acciones en el mercado de valores y el objetivo real de las operaciones efectuadas por Linzor, atiende, como ya lo ha sostenido, necesariamente a la consideración de aquellos patrones de conductas que estructuran el esquema Cascada, y no es conclusión de la sola revisión de la operaciones de venta y compra descritas, transacciones que se encontraban revestidas de las formalidades que imponían a la auditora, de conformidad a la documentación de respaldo, legal, tributaria, bursátiles, de publicidad, y normas de auditoría y práctica aceptada, justificadamente, la necesidad de alcanzar las conclusiones arribadas."

Reconoce que: "Se trata entonces de operaciones que no fueron inadvertidas, más aún cuando se tiene noticia cierta respecto de que varios de los directores eran a la



época comunes a ambas sociedades, constando expresamente su análisis, no sólo al considerar y aprobar los estados financieros y sus revelaciones, sino también a través de las presentaciones detalladas de los movimientos de cada rubro que mensualmente, según actas, la Administración hacía a los Directores; por el seguimiento detallado de stock y movimiento de inversiones en acciones que se les presentaba, entre otras consideraciones."

Insiste en que el "directorio y la administración, por su parte, no informaron, declararon o representaron la naturaleza de estas operaciones como efectuadas entre partes relacionadas, lo que, de serlo así, habría sido su obligación legal. Inclusive tampoco lo hicieron aquellos directores que son independientes o claramente con intereses contrapuestos a los del grupo controlador."

Acepta que "al análisis financiero de estas operaciones, que habría permitido a la Superintendencia corroborar su presunción en torno a la simulación que refiere, además de la existencia de patrones estructurantes de un esquema respecto de las sociedades cascada, ha debido considerar, necesariamente, la existencia de antecedentes aportados en otros expedientes administrativos, lo que en definitiva contribuyó a la conclusión de la SVS en torno a la utilización irregular de las sociedades Cascada para entregar oportunidades de negocios mediante una serie de



mecanismos, entre ellos, precisamente, a través del uso indebido de mecanismos bursátiles, que refiere la Superintendencia importó la implementación de conductas fraudulentas o engañosas, previamente sancionadas en otros expedientes administrativos.”

Se advierte en el razonamiento de las sancionadas que conocían todos los elementos de las transacciones, antecedentes que, a lo menos, le debieron llevar a profundizar en las hipótesis analizando en conjunto y no aisladamente dichas operaciones, calificándolas a la luz de los antecedentes de que disponían, los que se han reiterado en el curso de esta sentencia pero que ha expuesto singularmente la defensa en los párrafos anteriores. Tales antecedentes son los que le han permitido a los jueces de la instancia descartar sus defensas y a esta Corte Suprema igualmente desestimar los errores de derecho en dichas conclusiones.

En efecto, adecuadamente se rechazó la alegación derivada del hecho que “a la labor de auditoria, en términos universales, y para este reproche, no le es exigible, y bien no contó y no pudo contar, a lo menos, con la siguiente información que se precisa en los cargos, y que entiende aporta a la conclusión según la cual, dentro de un patrón de conducta en cuanto al actuar de las sociedades cascada, en relación a los precios en que se inscribían los remates, o respecto de la



instrumentalización de mecanismos bursátiles, entre otros, claramente se origina una discrepancia eminentemente técnica en relación a la opinión de auditoria debidamente razonada y concluida:

a) La transacción de venta de Global Mining se habría realizado entre las 9:33 y las 11:40 horas y mediante múltiples operaciones.

b) El tercero adquirente habría sido Linzor Total Return Fund.

c) La adquisición de Oro Blanco habría sido entre las 9:36 y 11:43 horas, también mediante múltiples operaciones.

d) El tercero vendedor habría sido también Linzor Total Return Fund."

Reitera que "Sobre este particular, corresponde enfáticamente aclarar que no es posible para el Auditor externo acceder a dicha información, dentro de los objetivos y alcances de una auditoria de estados financieros, y con las facultades que la ley le otorga. En este sentido, no está en condiciones el Auditor (ni puede éste exigirle a la Compañía) de indagar a terceros (intermediarios) los detalles de contrapartes, ni posee tampoco acceso a las bitácoras que indicarían los detalles por horas y minutos de cada transacción bursátil. Lo anterior, sin dejar de mencionar que, aun cuando pudiera acceder a ellas, no es un procedimiento





que Auditor alguno efectúe, dado que la fuente considerada fidedigna para constatar las operaciones es, habitualmente, de acuerdo al funcionamiento de nuestro mercado, la factura y documentación entregada por el intermediario o corredora de bolsa interviniente, y las respectivas transferencias de fondos."

Desconociendo los antecedentes expuestos con anterioridad agrega: "Así, a modo de ilustración, considerando la fuente fidedigna de auditoria, la revisión de los antecedentes relativos a transacciones de venta y compra de acciones (las facturas) no incorpora el detalle del hoy conocido desglose por lotes para la venta de las 5.000.000 de acciones de SQM-A, y así tampoco el detalle de las operaciones de compra de las 5.000.000 del mismo título, con la consecuente inexigibilidad vinculada al conocimiento de que las 22 operaciones OD, a través de las cuales Global Mining vendió las acciones SQM-A a Linzor, se efectuaron de manera intercalada, sucesiva y conjunta con las operaciones OD a través de las cuales Linzor vendió las acciones SQM-A a Oro Blanco, iniciándose estas operaciones a las 9:33:28 horas y finalizando a las 11:43:32 horas, totalizando 44 OD mediante las cuales Linzor compró 5.000.000 de acciones SQM-A y vendió al mismo tiempo igual cantidad. Como ya ha dicho, la constancia que PwC tuvo a la vista fue que tanto la venta como la compra de acciones se efectuaron



en un solo lote y, por ende, habría mediado el aviso previo de 20 horas, conforme a la práctica bursátil para transacciones de mayor volumen, lo que a la vista de la auditora aseguraba la transparencia de haberse transado en condiciones normales de mercado. Se trata este último argumento de una defensa respecto de la cual la SVS no se pronuncia en su resolución de sanción, situación que nuevamente evidencia la falta de motivación del Acto Administrativo que por este acto se recurre."

Con todo lo expuesto anteriormente, acepta la impropiedad de las transacciones, limitando sus alegaciones al desconocimiento circunstanciado de los hechos en su oportunidad, al evacuar la auditoría. Sin embargo, la autoridad no le ha requerido que llegara a una investigación tal que corroborara la posible ilicitud de las operaciones, pues ello le compete a la autoridad, solamente se le exigió ampliara su análisis y dejara expresado, a lo menos, en una ponderación global, el efecto financiero final de todo lo actuado y que por el hecho que podría tratarse de una compra de acciones entre sociedades relacionadas, debía profundizarse en el análisis, no obstante concurrir la presencia de un tercero, dado que ese solo antecedente no la descarta.

Insiste en no haber incurrido en los cargos formulados en su contra, "en ausencia de toda imputación de vinculación con el esquema y con los



patrones de conducta sancionados, y correspondientes a una globalidad de operaciones, materializadas en distintos tiempos, no puede dar lugar a la imposición de sanciones”, pero lo cierto es que dicho tratamiento global y exhaustivo es el que está ausente y que ha sido sancionado. La actuación posterior de la autoridad simplemente acreditó el hecho pesquisado, cumpliendo la auditora la determinación emanada de dicha comprobación, reversando el año 2012 “los efectos contables de las operaciones cuestionadas en el marco de su debido tratamiento, considerando la conclusión a que había arribado la SVS, de inexistencia, por simulación, de las referidas transacciones”, puesto que es lo que correspondía legalmente.

**Vigésimo Séptimo:** Que, por lo expuesto y razonado, el recurso de casación en el fondo no puede prosperar y debe ser desestimado por manifiesta falta de fundamento.

En conformidad, asimismo, con lo dispuesto en los artículos 764, 765, 766, 767, 768 y 782 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza, con costas, el recurso de casación en el fondo** deducido por la parte reclamante, en contra de la sentencia definitiva de uno de junio de dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.



**Se previene** que el Ministro señor Muñoz estuvo por no formular la consideración décima sexta, la cual no comparte.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Ministro señor Muñoz.

Rol N° 79.288-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Ángela Vivanco M., Sr. Leopoldo Llanos S., Sr. Jorge Zepeda A. (s) y el Abogado Integrante Sr. Álvaro Quintanilla P. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, el Ministro señor Zepeda por haber concluido su período de suplencia.





Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a veintiséis de abril de dos mil veintiuno, notifique en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

